

Asuntos legales que afectan la libertad de prensa

(Actualizado en febrero 2023)

Acceso a la información	<p>Antigua y Barbuda: The 2004 Freedom of Information Act grants citizens the right to access official government documents.</p> <p>Argentina: En 2022 el gobierno nacional realizó un procedimiento para nominar a la nueva directora nacional encargada del área, que asumió el 10 de marzo y recibió muchos cuestionamientos de las organizaciones de la sociedad civil por su perfil militante y sus escasos antecedentes en la materia. Si bien la ley está vigente y se cumple, no hay una política de transparencia activa y de promoción de la ley por parte del estado nacional. Pero es un tema que merecería un relevamiento más exhaustivo.</p> <p>El 14 de septiembre de 2016, la Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el proyecto de Acceso a la Información por 182 votos a favor y 16 en contra. La ley prevé la creación de una Agencia de Acceso a la Información Pública. Falta la promulgación del Presidente.</p> <p>El Decreto N° 1172/03, de acceso a la información pública, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2003 que obliga al Poder Ejecutivo nacional a dar información.</p> <p>Desde mayo de 2009 la provincia de Santa Fe cuenta con el decreto 692/09 que establece el derecho de libre acceso a la información pública en la órbita del Poder Ejecutivo provincial. También las provincias de Río Negro (Ley N° 1829/84, 1984), Chaco (Ley N° 6431/09, 2009), Chubut (Ley N° 3764/92, 1992), Córdoba (Ley N° 8803/99, 1999), Corrientes (Ley N° 5834/08, 2008), Entre Ríos (Decreto N° 1169/05, 2005), Jujuy (Ley N° 4444/89, 1989), La Pampa (Ley N° 1653/95, 1995), Salta (Decreto N° 1574/02, 2002), Santiago del Estero (Ley N° 6715/05, 2005), Tierra del Fuego (Ley N° 653/04, 2004), Catamarca (Ley N° 5336/11, 2011), Misiones (Ley IV N° 58/12, 2012) y la Ciudad de Buenos Aires (Ley N° 12475/00, 2000 y Decreto N° 2549/04, 2004), tienen normas que reglamentan el derecho de acceso a la información pública. En el Capítulo II de la Carta Magna Argentina (“Nuevos derechos y garantías”) se estableció por su Artículo 41 el derecho a ser provisto de información ambiental por las autoridades públicas y el correlativo deber de las mismas.</p> <p>En agosto de 2011 el Congreso de la provincia de Catamarca aprobó la Ley No. 5.336 de Acceso a la Información Pública. La ley entró en vigencia el 2 de marzo tras la publicación de su reglamento en el Boletín Oficial local. El Congreso de la provincia de Misiones aprobó el 7 de junio de 2012 la Ley de Acceso a la Información Pública provincial.</p> <p>Bahamas: The Freedom of Information Act, 2017 (No. 1 of 2017), was adopted on March 31, 2017.</p> <p>Barbados: Barbados has, in 2012, a draft Freedom of Information Bill under consideration.</p>
--------------------------------	--

Belice: Freedom of Information Act was passed in 1998, was amended in 2000.

Bolivia: En julio de 2013 el Ministerio de Transparencia presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley de transparencia y acceso a la información, que incluía 13 excepciones para acceder a la información. Según la Defensoría del Pueblo y la Asociación Nacional de la Prensa, estas excepciones restringirían el derecho a la información. Entre otros puntos, se dispone como excepción de acceso una “información que se encuentre en proceso, hasta tenerla concluida” y restringe “la información de impacto ambiental”. El proyecto además establece que será la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) la responsable de calificar de “reservada” una información pública. La aplicación de la norma alcanza a todas las entidades públicas (los cuatro órganos del Estado), Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Procuraduría, FFAA, Policía y universidades públicas; entidades privadas con participación estatal, entidades de servicios públicos básicos, asociaciones civiles, ONG y fundaciones. El Decreto Supremo N° 28168, de 2005, regula el acceso a la información en las instancias del Órgano Ejecutivo y determina la no exigibilidad de justificación del pedido ni el patrocinio de un abogado para la presentación de solicitudes de información; define las excepciones para el acceso a la información y establece el recurso administrativo y jerárquico en caso de negativa infundada a la solicitud.

Brasil: La Ley de Acceso a la Información Pública fue sancionada el 18 de noviembre de 2011 por la presidenta Dilma Rousseff. Entró en vigencia el 16 de mayo de 2012. En 2011 comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron la iniciativa PL 1947-07 que criminaliza la fuga de información confidencial sobre investigaciones oficiales. En 2015, el proyecto de ley espera ser inclusión en la plenaria de la Cámara, si se aprueba, necesitará pasa al Senado.

Brasil: A Lei de Acesso à Informação Pública, sancionada em 18 de novembro de 2011 pela presidente Dilma Rousseff, entrou em vigor em 16 de maio de 2012.

O PL 1947-07 - que tipifica o crime de violação de sigilo investigatório, foi aprovado em 2011 nas comissões da Câmara e aguarda inclusão na ordem do dia do Plenário para ser votado. Se aprovado, necesitará ser apreciado pelo Senado.

Canadá: Access to Information Act (R.S., 1985, c. A-1) came into force in 1983.

Chile: Fue promulgada la [Ley 20.285](#), sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de los Órganos de la Administración del Estado el 11 de agosto de 2008; entró en vigencia en abril de 2009. El Consejo para la Transparencia tiene la función de garantizar el cumplimiento de la ley y al que podrán recurrir los ciudadanos cuando se le niegue el acceso a la información.

La Ley de Acceso a la Información distingue entre transparencia activa y pasiva. La primera consiste en la obligación de publicar una serie de datos públicos, tales como el marco jurídico, la organización del órgano, el presupuesto, y el listado de todos los funcionarios que trabajen en cualquier calidad, con sus respectivos ingresos. Tratándose de ministros, subsecretarios y jefes de servicio, además tienen que publicar una declaración de intereses. Están obligados a la transparencia activa todos los poderes del Estado.

La transparencia pasiva, por su parte, consiste en la posibilidad de obtener información pública de toda índole, relacionada con la función de cualquier órgano de la Administración del Estado. Cada órgano debe entregar dicha información dentro del plazo de 20 días, y sólo puede rechazarlo en caso de que afecte la seguridad nacional, el interés público, los derechos de las personas o entorpezca la función pública. En caso de rechazo injustificado, se puede acudir al Consejo para la Transparencia, y posteriormente reclamarlo judicialmente.

La agencia encargada del acceso a la Información Pública es el Consejo para la Transparencia,
<https://www.consejotransparencia.cl/>.

Además, en el Gobierno, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia cuenta con la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, que coordina y promueve las acciones de gobierno abierto dentro de los distintos ministerios.
<https://www.integridadytransparencia.gob.cl/>

Colombia: En marzo 2022, el presidente Iván Duque expresó su objeción a la iniciativa al proyecto de ley 473 de 2021 Senado - 448 de 2020 Cámara para derogar la ampliación de términos para atender las peticiones ante autoridades y derogar la suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La FLIP considera que “la objeción presidencial es una violación grave al acceso a la información pública, que va en detrimento de la libertad de prensa, de la capacidad de investigación periodística, de la veeduría ciudadana y de control político. Afecta el derecho a acceder a información pública. Solo 20 países, incluida Colombia, han decidido extender los plazos de respuesta a derechos de petición. La prensa es uno de los actores más perjudicados por esta medida, pues no pueden acceder de forma oportuna a información pública, que sirve de insumo para realizar investigaciones de alto interés público”. El proyecto de ley busca restablecer los tiempos de respuesta de derechos de petición a 15 días, en vez de 21.

Fue sancionada el 6 de marzo de 2014 la Ley 1712, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. La Ley se originó en un proyecto presentado por varias organizaciones de la sociedad civil, el cual, a su vez, se basó en las recomendaciones y estándares aceptados internacionalmente y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Impone la ley a las entidades públicas, a los funcionarios y a los prestadores de servicios públicos, la obligación de entregar de manera clara, oportuna y ágil, información relacionada con la organización administrativa y financiera de las entidades, con los

servicios que prestan y con los contratos que celebran. Precisa los documentos e informaciones sometidos a reserva, respecto de lo cual la Corte Constitucional, en el estudio previo a la aprobación de la ley, declaró inconstitucional, por su ambigüedad y generalidad la norma que establecía amplia reserva a los documentos e informaciones relacionados con orden público, relaciones internacionales, seguridad y defensa nacional. Aclara y precisa la ley los procedimientos a los que pueden acudir los ciudadanos cuando se les niegue información pública e impone a las entidades y funcionarios públicos la obligación de explicar las razones legales por las cuales se niega información.

Costa Rica: En abril de 2022, fue aprobada la Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia, votada de manera unánime por el parlamento. El texto reduce los plazos de respuesta de las instituciones para la entrega de información solicitada por ciudadanos y periodistas. La ley dictamina que toda la Administración Pública Central, Descentralizada Institucional y Territorial y los demás entes de derecho público, así como personas jurídicas de derecho privado que custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios públicos, deberán responder a las solicitudes de información pública, con algunas excepciones indicadas en la ley, tales como información considerada secreto de Estado, excluyendo de la declaratoria de secreto de Estado lo relativo a derechos fundamentales, los datos personales e información que ponga en riesgo la seguridad de cualquier persona, entre otras, el secreto profesional, información acumulada para la prevención de delitos, entre otras. Reduce de 10 a 5 días hábiles el plazo de respuesta para entregar la información solicitada por ciudadanos y a solo 48 horas para los medios de comunicación, aunque prorrogables por una única vez en un plazo de cinco días adicionales, de acuerdo con la complejidad de la solicitud. Solo pide el llenado de un formulario con la identidad de los solicitantes.

Cuba: No existe en Cuba una ley de acceso a la información pública.

Ecuador: La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue aprobada el 4 de mayo de 2004, quedó eliminada con la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación en 2013.

El Salvador: La Ley de Acceso a la Información Pública fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 3 de marzo de 2011. Entró en vigor 1 año después de su publicación en el Diario Oficial.

Estados Unidos: Fue aprobada en 1966. / United States: Was approved in 1966.

Under the Freedom of Information Act (FOIA), individuals can request records from a long list of U.S. government agencies – the best resource on this (and FOIA generally) is foia.wiki. Additionally, the government's own website, foia.gov, contains an A-Z index of government agencies from which individuals can request records under FOIA. As to state public records laws, RCFP's [Open Government Guide](#) offers detailed information on each state.

Other U.S.-based organizations focused on government transparency and access to public records:

- [MuckRock](#)
- [First Amendment Coalition](#)
- [National Freedom of Information Coalition](#) (NFOIC also has coalitions representing many states: <https://www.nfoic.org/map/>)
- [Knight First Amendment Institute](#)
- [Electronic Privacy Information Center](#)
- [Electronic Frontier Foundation](#)
- [Student Press Law Center](#)
- [American Civil Liberties Union](#)
- [Center for Democracy and Technology](#)
- [Free Press](#)

Grenada: Grenada has a draft Freedom of Information Bill under consideration in 2012.

Guatemala: La Ley de Acceso a la Información Pública fue aprobada en forma unánime el 23 de septiembre de 2008, entró en vigor en febrero de 2009. El Ministerio de Gobernación aprobó lineamientos para la Ley de Acceso considerados “restrictivos” por expertos. El acuerdo ministerial 64-2015 entró en vigencia el 20 de enero de 2015 y aplica solo a la información que maneja el Ministerio de Gobernación. Contenía lineamientos para restringir el acceso público a información de carácter rutinario, pero que por ese instrumento cobraba categoría de clasificada, reservada y confidencial. Este acuerdo originó protestas de los medios de comunicación y sectores sociales, y por esa razón fue derogado 10 días después por el acuerdo ministerial 81-2015.

Guyana: Guyana’s Access to Information Act No. 21 of 2011 entered into force on July 10, 2013.

Honduras: El Congreso Nacional aprobó el 1 de marzo de 2022 la derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida popularmente como la Ley de Secretos Oficiales, aprobada en 2014. La ley facultaba al presidente y jefes de instituciones centralizadas y descentralizadas a clasificar la información oficial de "reservada" o de "confidencial" durante cinco y diez años, respectivamente, según la información oficial. Clasificar la información como "secreta" y "ultrasecreta", prohibía su publicación durante 15 o 25 años, según la ley derogada.

Aprobada por el Congreso el 23 de noviembre de 2006, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 30 de diciembre de 2006. La Ley garantiza el ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos; promover la utilización eficiente de los recursos del Estado; hacer

efectiva la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y en las relaciones del Estado con los particulares y combatir la corrupción y la ilegalidad de los actos del Estado.

El 7 de marzo de 2014 fue aprobada la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional que contradice principios de transparencia establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Clasifica la información pública como reservada, confidencial, secreta y ultra secreta, por un tiempo de 5, 10, 15 y 25. Muchos sectores han llegado a la conclusión que es inconstitucional y un duro golpe para el acceso a la información pública. El 14 de julio de 2014 el Consejo de Defensa y Seguridad aprobó la Resolución No. CNDS 069/2014, en la cual se clasifica como reservada la información proveniente de al menos 16 instituciones.

Jamaica: An 'Access to Information Act' was passed in 2002.

México: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental fue aprobada en 2002. Desde esa fecha, ha tenido diversas reformas, entre estas, se dio lugar a una reforma constitucional y a una nueva enmienda para ampliar el número de sujetos obligados e incluir a los estados para algunos efectos, entre otros, y para que sea garante también de datos personales. Incluso se cambió el nombre del estatuto a Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015.

Nicaragua: La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), Ley 621, fue aprobada el 16 de mayo de 2007. Entró en vigencia el 9 de enero de 2008, tras la publicación de su reglamento.

Panamá: La Ley 6 del 22 de enero del 2002, "Que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones", fue la primera norma jurídica de esta clase aprobada en Iberoamérica. La Ley establece el derecho de cualquier persona, panameño o extranjero, de solicitar la información de acceso público sin necesidad de abogado. La administración pública y los gobiernos locales tienen hasta 30 días para contestar, o para informar el uso de una prórroga por igual término. La Ley 6 regula tanto la transparencia activa de las agencias del Estado y gobiernos locales que deben hacer de conocimiento público su régimen legal, su organigrama, sus planes de trabajo y la identificación de su personal y su remuneración. En el año 2004, por una reforma constitucional se codificó en la Carta Magna panameña el derecho constitucional de acceso a la información pública y la acción de Habeas Data. La ley ha venido perdiendo eficacia en la medida que los funcionarios a cargo de instituciones han respondido pobremente a la información solicitada y los tribunales no han exigido que se cumpla con el fondo de la solicitud o en el detalle requerido para resolver las preguntas.

Paraguay: El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, promulgó el 18 de septiembre de 2014 la Ley No. 5.282 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”. La ley entra en vigencia a en septiembre de 2015. Reglamenta el artículo 28 de la Constitución Nacional “con el fin de garantizar a todas las personas el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública... promoviendo la transparencia del Estado”. Agrega que “ninguna disposición de esta ley podrá ser entendida o utilizarse para negar, menoscabar o limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa o la libertad de ejercicio del periodismo”.

Perú: El 3 de agosto del 2002, el presidente Alejandro Toledo promulgó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 27806. El 3 febrero del 2003 - El Congreso de la República, mediante Ley 27927, la modificó y el 24 abril del 2003, diario oficial El Peruano publicó el Texto Único Ordenado TUO de la Ley N° 27806, Decreto Supremo N° 043-2003-PCM que establece, entre otros, plazos para que la administración pública responda a las solicitudes ciudadanas de información; sanciones administrativas y penales por incumplimiento y puntualiza la información restringida por razones de seguridad nacional. El 6 de agosto 2003, mediante el D.S. N° 072-2003-la Presidencia del Consejo de Ministros, promulgó el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Publicado en el diario oficial El Peruano el 7 de agosto, incorpora las sugerencias de diversas organizaciones consultadas.

El 3 de junio del 2010, se publica el D.S. N° 063-2010-PCM que aprueba la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública.

El 25 de junio del 2010, se publica la Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM que aprueba la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública".

El 14 de junio del 2013, se publica el D.S. N° 070-2013- PCM que modifica el Reglamento de la Ley 27806.

El 4 de octubre del 2013, se publica Resolución Ministerial N° 252-2013-PCM que modifica la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP, Lineamientos para la implementación del Portal del Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública.

Puerto Rico: El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que el derecho de acceso a información pública como corolario necesario de los derechos de libertad de expresión, prensa y asociación, que explícitamente promulga el Art. II § 4 de la Constitución de Puerto Rico.

La Ley 122-2019, conocida como la “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico”, mediante la cual se establece como política pública que el manejo efectivo de datos gubernamentales es esencial para apoyar los procesos de innovación de todos los sectores en Puerto Rico, el facilitar una cultura de mejoramiento continuo y de rendición de cuentas en el organismo gubernamental, el desarrollo y crecimiento económico sostenible, y el generar resultados tangibles, de valor y de impacto a los ciudadanos. La Ley 122-2019 contiene los criterios mediante los cuales una agencia gubernamental puede reclamar la

confidencialidad de datos públicos y establece una serie de excepciones al requisito de divulgación de datos públicos. Ver: <https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/122-2019.pdf>.

La Ley 144-2019, conocida como la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública” establece una política pública de acceso a la información pública; así como mecanismos procesales de acceso a los documentos e información pública. Ver: <https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/bvirtual/leyesreferencia/pdf/141-2019.pdf>.

Aunque, de ordinario, los procesos judiciales son públicos, la toma de fotografías y/o video en los tribunales durante la celebración de sesiones judiciales o recesos, así como el radiodifundir o televisar procedimientos judiciales, se rige por las disposiciones del Canon 15 de los Cánones de Ética Judicial, <https://poderjudicial.pr/Documentos/Leyes-Reglamentos/Canones-Etica-Judicial-de-Puerto-Rico-2005.pdf>, y el Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Celebrados en las Salas de Recursos Extraordinarios (“PECAM”) <https://poderjudicial.pr/Documentos/Leyes-Reglamentos/Leyes/Reglamento-Utilizacion-Medios-Comunicacion-Procesos-Judiciales.pdf>.

República Dominicana: Existe la Ley 200-04 que establece el libre acceso a las fuentes oficiales de información. La Ley de Libre Acceso a la Información Pública (200-04) fue promulgada el 28 de julio de 2004 y su reglamento aprobado el 25 de febrero de 2005. El Gobierno ha establecido, en la mayoría de sus ministerios e instituciones descentralizadas, oficinas especiales para facilitar este acceso. El Congreso estudia un anteproyecto de ley para introducir modificaciones a la Ley 200-04 de acceso a la información, presentado por el presidente Leonel Fernández en marzo de 2011.

Saint Kitts & Nevis: On May 3, 2018, members of the National Assembly passed the Freedom of Information Bill 2018.

Saint Vincent and the Grenadines: A Freedom of Information Act was passed in 2003.

Trinidad & Tobago: Their first Freedom of Information Act was passed in 1999 and later updated in 2005.

Uruguay: El gobierno de Uruguay promulgó el 17 de octubre de 2008 la Ley de Acceso a la Información Pública – Ley 18.381–, aprobada por unanimidad el 7 de octubre de 2008 por el Congreso. El 17 de diciembre de 2013 el Parlamento modificó la Ley de Acceso a la Información Pública, se introdujeron nuevas limitaciones que permiten a los funcionarios argumentar mayores excepciones para negar información al público y a los medios.

	<p>Venezuela: El 20 de septiembre de 2021 fue publicada en la Gaceta Oficial No. 6.649 Extraordinario, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, sancionada por la Asamblea Nacional y promulgada por el Ejecutivo Nacional. Ha sido vista como un mecanismo de silencio, en lugar de acceso.</p>
<p>Colegiación obligatoria y/o título universitario</p>	<p>Argentina: No existe colegiación en la Argentina. Hubo un intento fallido en la provincia de Entre Ríos.</p> <p>Bolivia: Se requiere título.</p> <p>Brasil: A exigência de diploma específico, prevista no Decreto-Lei 972/69, foi considerada não recepcionada pela Constituição de 1988 (o que equivale a declará-la inconstitucional) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 17 junho de 2009.</p> <p>Em 2023 tramita na Câmara dos Deputados a PEC 206/12, do senador Antonio Carlos Valadares, que dispõe sobre a profissão de jornalista e, como já foi aprovada no Senado Federal, tramita apensada a ela outras 3 propostas de emendas constitucionais (PEC 386, 388 e 389 de 2009) que tratam do mesmo tema. Aguarda criação de Comissão Especial Temporária para analisar a matéria.</p> <p>Chile: Según lo dispuesto por el Artículo 10 de la Ley de Prensa (19.733), sólo podrán ser jefes de prensa en la Administración del Estado quienes tengan la calidad de periodistas. Por otra parte, la afiliación al Colegio de Periodistas en Chile es voluntaria, dado que es así para todos los colegios profesionales por mandato constitucional (Artículo 19 No. 19 de la Constitución).</p> <p>Colombia: En Colombia no está establecida la colegiación obligatoria ni la exigencia de un título universitario para el ejercicio del periodismo. La Sentencia C- 087 de 1998 de la Corte Constitucional declaró inexecutable la ley 51 de 1975 que establecía la tarjeta profesional del periodista como requisito para el ejercicio de la actividad periodística. En esta sentencia dijo la Corte que el ejercicio de la actividad periodística es un derecho fundamental de carácter universal que no puede ser limitado mediante la exigencia de títulos o reconocimientos previos de ninguna naturaleza.</p> <p>Costa Rica: Derogó la colegiación obligatoria tras la Opinión Consultiva de 1985.</p> <p>Cuba: Se necesita certificado oficial para ejercer.</p> <p>Ecuador: El 12 de marzo de 2008, el Tribunal Constitucional emitió la resolución Nº 38-2008 que declaró inconstitucional, por razones de fondo, dicha obligatoriedad, sin embargo la Ley de Comunicación que debate la Asamblea Nacional incluye la colegiatura obligada y el Código Penal que regirá a partir de agosto de 2014 penaliza a quien trabaje como periodista sin título universitario.</p>

Haití: Se requiere de título profesional.

Honduras: Colegio.

México: No existe una regulación legal sobre la preparación académica de los reporteros, cada medio de comunicación establece sus propios requisitos para contratación.

Nicaragua: Colegio.

Panamá: No existe colegiatura obligatoria. En 1994 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la colegiatura obligatoria para los abogados, por lo que se entiende que el mismo principio se aplicaría para periodistas y otras profesiones liberales. No obstante, con regularidad surgen iniciativas que promueven anteproyectos de ley para establecer la colegiatura obligatoria, un título universitario local y/o licenciamiento estatal y restringir el ejercicio del periodismo a nacionales.

Paraguay: No existe colegiatura obligatoria.

Perú: No es obligatorio haber obtenido grado de bachiller en comunicaciones o estar afiliado al Colegio de Periodistas del Perú para ejercer el periodismo. El 17 de septiembre de 1980, el Senado de la República promulgó la Ley N° 23221 que creó el Colegio de Periodistas del Perú, como entidad autónoma de derecho público interno, representativa de la profesión periodística en todo el territorio de la República, sin perjuicio de las otras entidades gremiales o sindicales de periodistas. Pero fue derogado el 12 de marzo de 1998 con la Ley N° 26937, cuyo Art. 1 establece que: “El inciso 4 del Art.2 de la Constitución garantiza la plena vigencia del derecho de libre expresión del pensamiento, con sujeción a las normas vigentes”. El Colegio de Periodistas del Perú interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la norma ante el Tribunal Constitucional. El 20 de enero del 2006, el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, declaró infundada la demanda y sentenció que: “nuestra Constitución no restringe la titularidad de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la libertad de información sólo a determinados sujetos; por el contrario, extiende la titularidad de los derechos comprendidos en su artículo 2º a todas las personas. Reservar el ejercicio de la actividad periodística a personas que han obtenido un título profesional en periodismo supone una limitación injustificada del ejercicio de los derechos fundamentales aludidos y una distinción, en cuanto a su titularidad, que la Constitución no realiza”.

República Dominicana: En 1989, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el precepto de obligatoriedad de afiliación de los periodistas a un cuerpo colegiado. Existe la ley 10-91 que establece el Colegio Dominicano de Periodistas y

	<p>regula sus actividades. La colegiatura no es obligatoria, pero cursa en el Congreso un anteproyecto de ley que procura restablecer esa obligatoriedad.</p> <p>Venezuela: Colegio. 31 de marzo de 1995, Ley de Ejercicio del Periodismo, Capítulo I, De la profesión. Artículo 1.- El ejercicio de la profesión de Periodista se regirá por la presente Ley y su Reglamento. Los miembros del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) estarán sometidos como tales a los reglamentos internos del Colegio, al Código de Ética del Periodista Venezolano y a las resoluciones que dicten los órganos competentes del Colegio. Artículo 2.- Para el ejercicio de la profesión de periodista se requiere poseer el título de Licenciado en Periodismo, Licenciado en Comunicación Social o título equivalente, expedido en el país por una Universidad, o título revalidado legalmente; y estar inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y en el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPSP). Los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en esta disposición, serán los únicos autorizados para utilizar el título de Periodista Profesional.</p>
<p>Derecho de Réplica o Respuesta</p>	<p>Argentina: La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció su vigencia, basándose en el Art. 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aun cuando han existido en el Congreso de la Nación diversos proyectos de ley tendientes a reglamentar ese artículo, no existe en la actualidad ninguna norma nacional que cumpla esa finalidad. Distintas normas provinciales han regulado este derecho, pero las facultades de las provincias para hacerlo han sido rechazadas por distintos autores.</p> <p>Brasil: Con la derogación de la Ley de Prensa de 1967 el 30 de abril de 2009, los delitos de calumnia, injuria y difamación, serán juzgados por lo establecido en el Código Penal, cuyas penas son menos severas que las de la ley. En 2015, se publicó y sancionó la Ley Nº 13.188/2015, que disciplina el ejercicio del derecho de réplica o rectificación del ofendido en un asunto divulgado, publicado o transmitido por un medio de comunicación, tal como está previsto constitucionalmente.</p> <p>Brasil: Com a anulação da Lei de Imprensa de 1967 em 30 de abril de 2009, os crimes de calúnia, injúria e difamação passaram a ser julgados conforme o Código Penal, que, sob alguns aspectos é mais severo do que a antiga Lei de Imprensa. Em 2015 foi publicada e sancionada a Lei n.º 13.188/2015, que disciplina o exercício do direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, conforme previsão constitucional.</p> <p>Chile: El derecho a réplica se encuentra reconocido a nivel constitucional, en virtud del Artículo 19 No. 12 de la Constitución, y regulado en la Ley de Prensa (No. 19.733), en los Artículos 16 a 21. La tutela para dar cumplimiento a este derecho se encuentra confiada a los tribunales de justicia. En materia de autorregulación, el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación también se ha pronunciado sobre la exigencia y condiciones de la réplica.</p>

Colombia: La réplica en los medios de comunicación del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético está reconocida en el artículo 112 de la Constitución Política como derecho de los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición.

Costa Rica: El derecho de réplica se encuentra regulado en la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, firmado por Costa Rica en 1969 y ratificado en 1970), artículo 14: “1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que la ley establezca”. Este artículo no se aplica durante épocas electorales.

Ecuador: El numeral 7 del artículo 66 de la Constitución establece: “El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario”. La Ley Orgánica de Comunicación de 2013 establece en su Art. 24.- Derecho a la réplica: Toda persona o colectivo humano que haya sido directamente aludido a través de un medio de comunicación, de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o reputación; tiene derecho a que ese medio difunda su réplica de forma gratuita, en el mismo espacio, página y sección en medios escritos, o en el mismo programa en medios audiovisuales y en un plazo no mayor a 72 horas a partir de la solicitud planteada por el aludido. En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el derecho de réplica, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, previa la calificación sobre la pertinencia del reclamo, las mismas medidas administrativas establecidas para la violación del derecho a la rectificación.

El Salvador: La Asamblea Legislativa aprobó el 11 de julio de 2013 la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación o Respuesta. Este es un instrumento jurídico que desarrolla un procedimiento entre la persona afectada con una publicación y el medio de comunicación, que de no lograrse, se ventilará en un tribunal de Paz. De acuerdo a la normativa, que contiene 25 artículos, la persona afectada tendrá derecho “a exigir la inserción gratuita de la correspondiente rectificación o respuesta, en el mismo medio, en similar forma en que fue comunicada o publicada”. La norma establece que la responsabilidad del medio de comunicación se limita única y exclusivamente a la publicación que reconozca de manera voluntaria o la ordenada por el juez, sin lugar a otro tipo de responsabilidad. No obstante, advierte de la desobediencia para con el medio de comunicación que será regulado según lo establece el Código Penal.

México: La Constitución, a través de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, adicionó el artículo 6°, el cual establece: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden

público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”. El 25 de marzo de 2010, senadores de las tres principales fuerzas políticas (PAN, PRI y PRD) impulsaron sanciones a los medios de comunicación para garantizar el derecho de réplica. En México el derecho de réplica está presente en la legislación, pero no se lleva a la práctica, su ejercicio ocasional depende de la buena voluntad de los medios. El 24 de noviembre de 2011 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las reformas reglamentarias para regular el derecho de réplica aprobado por el Instituto Federal Electoral (IFE), al considerar que si bien no hay una legislación secundaria, es un derecho humano que la autoridad está obligado a garantizar a las personas que se sientan afectadas en su honra, se consideren calumniadas o afectadas por informaciones inexactas o excesos de los medios de comunicación. El derecho de réplica ha sido objeto de estudio desde diversos ángulos en diversas universidades del país; sin embargo, su evidente falta de ejercicio es actualmente (28 de mayo de 2015) objeto de análisis comparativo y de propuesta de aplicación en la Universidad Autónoma de Coahuila con el trabajo “Análisis del marco jurídico que regula la libertad de expresión y el derecho de réplica en España. Una propuesta de aplicación para los diarios impresos mexicanos a partir de las reformas constitucionales de 2007, 2011 y 2013”, de la Master en Derecho Araceli P. López, de la Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la UAC.

Panamá: El derecho a réplica es regulado por la ley 22 de 2005. En el artículo 2 se establece la obligación de los medios de comunicación a publicar las réplicas o rectificaciones que se reciban en el mismo espacio que la noticia que lo agravia o en el espacio designado previamente por el medio para publicar o difundir las réplicas, rectificaciones, aclaraciones, respuestas o comentarios.

Paraguay: La Constitución de 1992, en su Art. 28. Del derecho a informarse, establece que: “Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuaníme. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo. Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios”. Esta disposición se corresponde con la Ley 1262/1987, del 8 de octubre de 1987, que establece el derecho de rectificación o contestación, la que sigue vigente para todo el procedimiento establecido en la misma para la publicación de la rectificación o réplica.

Perú: El Artículo 2° inciso 7 de la Constitución Política del Perú 1993, consagra el derecho a la rectificación frente a informaciones inexactas o agraviantes, mas no el derecho de réplica. El 9 de julio de 1997, el gobierno del presidente Alberto Fujimori promulgó la Ley N.º 26847, que sustituye artículos de la Ley N° 26775, que establece el derecho de rectificación de personas afectadas por afirmaciones inexactas en medios de comunicación social. No incluye el derecho de réplica.

	<p>República Dominicana: El derecho de réplica está garantizado en la nueva Constitución en vigor desde 2010.</p>
<p>Desacato</p>	<p>Argentina: El desacato fue derogado de la legislación el 8 de junio de 1993. El Art. 2 de la Ley 24.198, estableció la eliminación de Art. 244 (desacato) del Código Penal.</p> <p>Barbados: Contempt of Court is a perennial restraint on the press. This doctrine restrains the press from publishing anything that might corrupt or adversely influence or pervert the course of justice. The law is a notorious minefield especially as it relates to the investigation of a crime where no one has yet been charged. The law is based on the common law and is only properly understood by weaving ones way through a labyrinth of case law that is not easy to distill with any certainty since a journalist may have to make a fine judgment about the stage of the investigations as part and parcel of the decision to publish and still steer clear of the law. An accusation of contempt of Court exposes the journalist to a fine or possible imprisonment. Scandalising the Court is an aged concept which is used albeit rarely nowadays but was rejuvenated in 2014 in the United Kingdom by an Irish Court against a retired Cabinet minister who criticized a Court in an article which he wrote about his time in political office. Although the matter did not get much traction, even though the minister was charged, it represents a present danger, and may still be regarded as a danger negatively inhibiting freedom of expression as it relates to the Press.</p> <p>Bolivia: El 20 de septiembre de 2012 el Tribunal Constitucional de Bolivia declaró inconstitucional el delito de desacato. Se eliminó el Art. 162 del Código Penal que sancionaba entre un mes y dos años de cárcel a cualquier persona que “calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas”. La pena era mayor si se trataba del presidente o vicepresidente del país. El fallo se conoció el 23 de octubre de 2012.</p> <p>Chile: Eliminación parcial, se derogó el 4 de junio de 2001 el delito de desacato previsto en el Art. 6 b de la Ley de Seguridad del Estado. Sin embargo, el desacato fue reformado en 2005, eliminando las injurias a autoridades públicas y limitándolo a casos de amenaza y desorden público que impida el funcionamiento de los poderes del Estado. El desacato todavía se encuentra vigente en los Artículos 383 y 384 del Código de Justicia Militar.</p> <p>Colombia: No existe el delito de desacato en Colombia.</p> <p>Costa Rica: Eliminado el delito de desacato en marzo de 2002 (Act. 8224), por enmienda del Art. 309 del Código Penal Criminal.</p> <p>Cuba: El 20 de enero de 2022 el Tribunal Supremo de Cuba presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal. En su Sección cuarta, sobre desacato, el Artículo 185. establece que: “Quien amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o, de cualquier modo, ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro, a un funcionario público, autoridad o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas, incurre en sanción de privación de</p>

libertad de seis meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas, o ambas. Precisa que: “Si el hecho previsto en el apartado anterior se realiza respecto al Presidente o Vicepresidente de la República, al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los demás miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros, a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al Presidente del Tribunal Supremo Popular, al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República o al Presidente del Consejo Electoral Nacional, la sanción es de privación de libertad de uno a tres años”. El Artículo 167, en el Capítulo IX sobre “Financiamiento al terrorismo”, prohíbe y castiga con cárcel recibir fondos extranjeros. La iniciativa será tratada en abril de 2022. <https://www.tsp.gob.cu/sites/default/files/documentos/ACP%20EN%20WEB.%2019.01.2022.pdf>

Ecuador: El desacato está vigente en el Código Penal y establece una penalidad de hasta tres años de prisión. En octubre del 2011 el gobierno envió a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma al Código Penal que retira la palabra “desacato” pero mantiene su espíritu ya que la difamación hacia la autoridad es más grave que la privada. El Código Penal que regirá a partir de agosto de 2014 mantiene la criminalización del desacato a las autoridades.

El Salvador: El Código Penal establece el delito de desacato como una amenaza de hecho o de palabra contra un funcionario público que conlleva una pena de prisión de entre seis meses y tres años. Si la ofensa fuera dirigida en contra del presidente, vicepresidente o cualquier funcionario de alto rango del gobierno, “la sanción podrá aumentarse hasta en una tercera parte de su máximo”.

Guatemala: El 1 de febrero 2006 la Corte Constitucional decidió la eliminación del desacato (artículos 411, 412 y 413) del Código Penal.

Honduras: El 19 de mayo 2005 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia derogó la figura del desacato contemplada en el artículo 345 del Código Penal.

Panamá: El 6 de julio 2005 se derogaron las leyes mordaza. Previamente la Asamblea Legislativa, aprobó el 16 de mayo un proyecto de ley que prohíbe sanciones por desacato, entre otras disposiciones.

Paraguay: 26 de noviembre de 1997, fue derogado del Código Penal. En vigencia desde 1998.

Perú: En mayo del 2003, el Congreso de la República promulgó la Ley N° 27975 que derogó el Artículo 374 del Código Penal, despenalizando la figura de desacato.

	<p>Puerto Rico: El Art. 279 Código Penal de Puerto Rico tipifica el desacato como delito menos grave la siguiente conducta: Incurrirá en delito menos grave toda persona que realice cualquiera de los siguientes actos:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Perturbe el orden, cause ruido o disturbio o se conduzca en forma desdeñosa o insolente hacia un tribunal de justicia o un juez durante el desarrollo de una investigación judicial o una sesión, tendiendo con ello directamente a interrumpir los procedimientos o menoscabar el respeto debido a su autoridad, o en presencia del jurado mientras esté en estrado o deliberando en alguna causa. (b) Desobedezca cualquier decreto, mandamiento, citación u otra orden legal expedida o dictada por algún tribunal. (c) Demuestre resistencia ilegal y contumaz a prestar juramento o llenar los requisitos como testigo en una causa pendiente ante cualquier tribunal, se niegue sin excusa legítima a contestar cualquier interrogatorio legal después de haber jurado o llenado dichos requisitos. (d) Exprese crítica injuriosa o infamatoria de los decretos, órdenes, sentencias o procedimientos de cualquier tribunal que tienda a desacreditar al tribunal o a un juez. (e) Publique cualquier informe falso o manifiestamente inexacto sobre procedimientos judiciales, a sabiendas de su falsedad. <p>La Regla 242 de Procedimiento Criminal también establece procedimientos sumarios y ordinarios para castigar el desacato criminal.</p> <p>Al amparo del Art. art. 2.017 de la Ley 201-2003 (según enmendada, conocida como la “Ley de la Judicatura de 2003”), los jueces en los Tribunales de Puerto Rico tienen la facultad de castigar por desacato.</p> <p>Uruguay: En junio de 2009 se eliminó el delito que castigaba con penas de prisión a quienes “atentaran contra el honor” de los jefes de Estado extranjero o sus representantes diplomáticos.</p> <p>Venezuela: Agravamiento de penas. En febrero de 2005 fue sancionada la Ley de Reforma Parcial del Código Penal, artículos 148 y 149, que ensalzan la figura del desacato y castiga a quien ofendiere de palabra o por escrito al Presidente y a otros funcionarios del gobierno, jueces y legisladores.</p>
<p>Difamación y despenalización</p>	<p>Argentina: La Cámara de Senadores aprobó el 18 de noviembre del 2009, por unanimidad, el proyecto que despenaliza el delito de calumnias e injurias en expresiones referidas a asuntos de "interés público". En reunión plenaria, 51 senadores sancionaron la ley que elimina ese delito e introduce la "doctrina de la real malicia" para juzgar a los involucrados.</p> <p>Barbados: Defamation laws are recognized by the Constitution itself as a legal restraint on the unbridled freedom of the press to communicate ideas. The particulars of the Defamation Act are set out in the Defamation Act Cap 199 of the Laws of this</p>

country. In considering the Law of Defamation, one's views have to take into account the judicially created concept of responsible journalism which has been developed by the English Courts and applied to the region by the Privy Council in the important Jamaican case of *Bonnick v Morris*. The impact of the concept of responsible journalism is that the person will escape a finding of defamation, if he/she has been a responsible journalist in the sense that has properly investigated a matter of public concern and of public interest, and has satisfied certain judicially imposed criteria, a finding of no liability will be declared in favour of the journalist.

Bermuda: On August 12, 2011 the Supreme Court of Bermuda ruled that defamation was unconstitutional because it criminalises trivial and non-intentional libel, and lacks safeguards to prevent abuse.

Bolivia: El 15 de diciembre de 2017 fueron promulgadas reformas al Código del Sistema Penal de Bolivia en el que se incluyen artículos adversos a la libertad de prensa que afectarían el desempeño de la actividad periodística y promoverían la autocensura por temor a represalias penales. Se denunció en específico la falta de claridad en los artículos 309, 310 y 311 sobre delitos de difamación por considerar que lesionan la libertad de prensa al permitir la aplicación de penas de hasta un año de cárcel.

Brasil: Con la derogación de la Ley de Prensa de 1967, el 30 de abril de 2009, por parte del Supremo Tribunal Federal, los delitos de calumnia, injuria y difamación, serán juzgados por lo establecido en el Código Penal, cuyas penas son menos severas a las que contemplaba la ley.

Brasil: Com a anulação da Lei de Imprensa de 1967 em 30 de abril de 2009, os crimes de calúnia, injúria e difamação serão julgados pelo estabelecido no Código Penal.

Chile: Eliminación parcial. Se derogó en 2005 la difamación, contenida en la Constitución (Artículo 19 No. 12). Sin embargo, mantiene la injuria y la calumnia en el Código Penal (Artículos 412 a 431), a los cuales se remite el artículo 29 y siguientes de la ley de prensa.

Colombia: El 5 de enero de 2009, el Congreso promulgó la Ley 1273 por medio del cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado – denominado “De la Protección de la información y de los datos” - y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. No hay proyecto en curso para la despenalización de la injuria y la calumnia, delitos que se encuentran regulados en los artículos 220 y 221 del Código Penal Colombiano en los siguientes términos: Artículo 220: "El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes". Artículo 221: "El que impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de

diez (10) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes". Las penas de estos delitos fueron aumentadas en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo por la ley 890 de 2004. El artículo 224 del Código Penal establece que no será responsable de estos delitos quien probare la veracidad de las imputaciones, excepto cuando se imputen conductas que se refieran a la vida sexual, conyugal, marital o de familia, o al sujeto pasivo de un delito contra la libertad y la formación sexuales. No hay lugar a responsabilidad en caso de retractación siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el artículo 225 del Código Penal.

El Art. 222 tipifica en los siguientes términos la injuria y calumnia indirectas: "A las penas previstas en los artículos anteriores quedará sometido quien publicare, reprodujere, repitiere calumnia o injuria imputada por otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u otra semejante". De acuerdo con el artículo 223 la comisión de los delitos de injuria y calumnia utilizando cualquier medio de comunicación social u otro de divulgación colectiva da lugar a la agravación de la pena de una sexta parte a la mitad.

Costa Rica: En 2010, la entonces legisladora Laura Chinchilla, (1998 - 2002) presentó al Congreso una iniciativa para que la difamación cambiara de ser una ofensa criminal a una civil. En octubre de 2013 seguía sin avanzar en la Asamblea Legislativa una iniciativa para la despenalización de la injuria, difamación y calumnia. La Ley de Imprenta fue promulgada en Costa Rica el 12 de julio de 1902. En un fallo del 18 de diciembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia dio por derogado el artículo 7 de la Ley, que establecía penas de prisión contra periodistas y dueños de medios condenados por injurias y calumnia. Este dictamen de 2009 no despenaliza estos delitos, sino que confirma que se rigen por el Código Penal que sólo contempla multas económicas en casos de difamación.

Ecuador: La difamación está vigente en el Código Penal y estipula prisión de hasta tres años. En octubre del 2011 el gobierno envió a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma al Código Penal que mantiene la difamación, pero diferencia la penalidad al establecer en dos años de prisión para el que difame a un ciudadano privado y en tres años para el que difame a una autoridad. Además, crea la figura de "pánico económico" y establece prisión de entre siete y nueve años a quien, desde dentro o fuera del país, cause daño a la economía o al sistema financiero difundiendo noticias falsas.

El nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), que entró en vigencia el 10 de agosto de 2014, mantiene la criminalización de la difamación, el desacato a las autoridades y penaliza a quien trabaje como periodista sin título universitario. El nuevo Código Penal reemplaza la normativa anterior adoptada en el país en 1938.

El Salvador: La despenalización de los delitos de injuria y calumnia entró en vigencia en El Salvador en el 2004 con la reforma de su Código Penal. El 8 de septiembre de 2011, los diputados aprobaron el Decreto No. 836 que contenía reformas al Código Penal, entre los cuales contempló la anulación de la cárcel como pena a los delitos de calumnia, difamación e injuria sustituyéndola por multas, para las cuales también establece límites en las indemnizaciones. El Poder Ejecutivo avaló y

enmendó el decreto que modifica el Código Penal. Fue aprobado el 9 de noviembre de 2011 por la Asamblea Legislativa que aceptó parcialmente las observaciones del Presidente.

Grenada: Criminal libel laws repealed in July 2012.

Honduras: Siguen vigentes (2015) las disposiciones del Código Penal relacionados a los delitos de calumnia, injuria y difamación (Arts.155- 169).

Jamaica: The Jamaican Parliament passed a bill on Nov. 5, 2013, that fully abolishes criminal defamation within the nation. The 2013 Defamation Bill will replace the 19th-century Libel and Slander Act and the 1963 Defamation Act, removes criminal defamation from law and grants responsibility to judges instead of juries to determine damages in lawsuits.

México: El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el 29 de noviembre de 2011, con 81 votos a favor y ninguno en contra, la derogación de los Art. 1 y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta anulando la pena de cárcel en los delitos de difamación, calumnia e injurias, convirtiéndolos en infracciones civiles. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2012 con la firma del presidente Felipe Calderón.

Panamá: (Parcial) El 22 de mayo de 2008 entró en vigor el actual Código Penal que modificó y despenalizó varios de los delitos contra el honor, si el sujeto pasivo de los mismos es un servidor público o una persona de interés público. La norma mantiene el derecho a la reclamación civil por daños, los que pueden incluir afectaciones emocionales, morales o reputacionales. Estas demandas civiles no tienen un tope máximo a las reclamaciones monetarias, gracias a lo cual se han convertido en una herramienta de acoso judicial, ya que en Panamá el demandante civil tiene derecho a embargar “preventivamente” los bienes del demandado para garantizar un futuro pago indemnizatorio. Estos embargos se han convertido en una condena anticipada, ya que la justicia panameña es lenta y muy maleable, y los procesos civiles pueden tardar más de 10 años.

Paraguay: CODIGO PENAL DE PARAGUAY - LEY Nº. 1.160/97 /Artículo 151.- Difamación. 1º El que afirmara o divulgara, a un tercero o ante éste, un hecho referido a otro, capaz de lesionar su honor, será castigado con ciento ochenta días-multa. 2º Cuando se realizara el hecho ante una multitud o mediante difusión de publicaciones conforme al artículo 14, inciso 3º, o repetidamente durante un tiempo prolongado, la pena podrá ser aumentada a pena privativa de libertad de hasta un año o multa.

3º La afirmación o divulgación no será penada cuando sea dirigida confidencialmente a una persona allegada o cuando, por su forma y contenido, no exceda los límites de una crítica aceptable.

4º La afirmación o divulgación no será penada cuando, sopesando los intereses y el deber de averiguación que incumba al autor de acuerdo con las circunstancias, se tratara de un medio proporcional para la defensa de intereses públicos o privados.

5º La prueba de la verdad de la afirmación o divulgación será admitida sólo cuando de ella dependa la aplicación de los incisos 3º y 4º. 6º En vez de la pena señalada, o conjuntamente con ella, se aplicará lo dispuesto en el artículo 59. No se ha despenalizado la difamación.

Perú: El 21 de julio del 2011, el Congreso de la República, aprobó Proyecto de Ley Nº 4581/2010 –CR, que modifica el artículo 132º del Código Penal, eliminando la pena privativa de libertad para el caso de afectaciones al honor como consecuencia del ejercicio excesivo de la libertad de expresión, en primera votación. Sin embargo, el 27 de julio, pocas horas antes del fin de su gestión, el presidente García observó la modificación del Artículo 132º del Código Penal y lo remitió al parlamento, quedando sin efecto al finalizar la legislatura.

Puerto Rico: El Código Penal de Puerto Rico no tipifica la difamación como delito. En Puerto Rico existe una causa de acción civil por difamación.

República Dominicana: En julio de 2014 el Tribunal Constitucional aún no se habría pronunciado sobre una demanda de nulidad presentada por un grupo de medios y periodistas para que se despenalicen los delitos de injuria y calumnias que se expresan en el Código Penal y en la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento. Se pide la eliminación de 11 artículos de la Ley y cinco del Código Penal, que se consideran incompatibles con la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. El recurso de inconstitucionalidad fue presentado el 25 de febrero de 2013.

Trinidad & Tobago: En noviembre de 2012, la primera ministra de Trinidad & Tobago, Kamla Persad-Bissessar, reiteró su compromiso de revisar las leyes penales de difamación.

Uruguay: En junio de 2009, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó una reforma a la ley de prensa para la despenalización de los delitos de difamación, injuria, vilipendio de símbolos, desacato y delitos contra el honor a un jefe de Estado extranjero. También introdujo el concepto de real malicia y modera el derecho de respuesta. Para hacerla efectiva deberá ser promulgada por el presidente. Se eliminó el delito que castigaba con penas de prisión a quienes “atentaran contra el honor” de los jefes de Estado extranjero o sus representantes diplomáticos.

Venezuela: Aumentan las penas de prisión sobre los delitos de difamación, en los artículos 444 y 446 del Código Penal, así como sanciones contra personas que se manifiestan pública o privadamente, como estipula el artículo 508, según reforma de 2005.

<p>Ley delitos informáticos (e uso de aparatos no tripulados)</p>	<p>Argentina: El 4 de junio de 2008, fue sancionada la Ley 26.388 de Delitos Informáticos. Es una ley que modifica, sustituye e incorpora figuras típicas a diversos artículos del Código Penal, con el objeto de regular las nuevas tecnologías como medios de comisión de delitos.</p> <p>Brasil: El 3 de diciembre de 2012 la presidenta Dilma Rouseff promulgó la primera ley contra delitos informáticos, conocida como "ley Carolina Dieckmann", una actriz a la que le robaron fotos íntimas de su computadora. La ley, que castiga con cárcel la violación de dispositivos electrónicos con el fin de obtener o adulterar datos, fue sancionada y divulgada en el Diario Oficial de la Unión tras su aprobación en el Congreso el 7 de noviembre de 2012. La ley tipifica como delito la invasión de dispositivos electrónicos ajenos con el "fin de obtener, cambiar o destruir datos o informaciones" y castiga con cárcel la producción y distribución de dispositivos que permitan invadir teléfonos inteligentes o tabletas electrónicas. También será considerado como delito la obtención ilegal de datos bancarios por vías electrónicas, con penas de uno a cinco años de cárcel. La ley también amplía a los medios electrónicos la prohibición de contenidos racistas, tal como ocurre actualmente con la prensa, la televisión y la radio.</p> <p>Em 3 de dezembro de 2012, a presidente Dilma Rousseff promulgou a primeira lei contra crimes cibernéticos, conhecida como “lei Carolina Dieckmann”, uma atriz que teve suas fotos íntimas roubadas do seu computador. A lei, que prevê pena de prisão para invasão de dispositivos eletrônicos para obter ou adulterar dados, foi sancionada e divulgada no Diário Oficial após ser aprovada no Congresso em 7 de novembro de 2012. A lei tipifica como crime a invasão de dispositivos eletrônicos alheios “para obter, alterar ou destruir dados ou informações” e prevê pena de prisão para a produção e distribuição de dispositivos que permitam invadir smartphones ou tablets. Será também considerado crime obter de maneira ilegal dados bancários por meio eletrônico, com pena de um a cinco anos de prisão. A lei também estende aos meios eletrônicos a proibição de conteúdos racistas, como o que acontece com a imprensa, televisão e rádio.</p> <p>En 2014, el Congreso Nacional aprobó el llamado Marco Civil de Internet (LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014). La ley establece principios, garantías, derechos y deberes para el uso de internet en Brasil.</p> <p>La aplicación de la ley fue reglamentada por el Decreto n.º 8.771, de 11 de mayo de 2016, para tratar los casos admitidos de discriminación de paquetes de datos en internet y degradación del tráfico, indicar procedimientos de custodia y protección de datos por parte de los proveedores de conexión y aplicaciones, señalar medidas de transparencia en la solicitud de datos de registro por parte de la administración pública y establecer parámetros de inspección y verificación de infracciones.</p> <p>Em 2014, o Congresso Nacional aprovou o chamado Marco Civil da Internet (LEI No. 12.965, 23 ABRIL 2014). A lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. A aplicação da lei foi regulamentada pelo Decreto n.º 8.771, de 11 de maio de 2016, para tratar das hipóteses admitidas de discriminação de pacotes de dados na internet e de degradação de tráfego, indicar procedimentos para guarda e proteção de dados por provedores de conexão e de aplicações,</p>
--	---

apontar medidas de transparência na requisição de dados cadastrais pela administração pública e estabelecer parâmetros para fiscalização e apuração de infrações.

El 10 de julio de 2018, el Senado Federal aprobó el Proyecto de Ley de la Cámara nº 53/2018 y el 14 de agosto el Presidente Michel Temer sancionó la Ley nº 13.709/2018, Ley General de Protección de Datos Personales - LGPD, que prevé el tratamiento de datos personales, incluso en medios digitales, por persona física o jurídica de derecho público o privado, con el fin de proteger los derechos fundamentales de libertad y privacidad y el libre desarrollo de la personalidad de la persona física. Em 10 de julho de 2018 o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei da Câmara n.º 53/2018 e em 14 de agosto o presidente Michel Temer sancionou a Lei n.º 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Chile: [Ley 19.628](#), sobre protección de datos de carácter personal.

Colombia: El 5 de enero de 2009, el Congreso promulgó la Ley 1273 por medio del cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado – denominado “De la Protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.

Costa Rica: El 21 de abril de 2013, la Asamblea Legislativa aprobó las reformas a la Ley de Delitos Informáticos (Ley Mordaza) que desde su entrada en vigencia, el 7 de noviembre de 2012, el Art. 288 causó polémica por cuanto castigaba entre cuatro y ocho años de cárcel a quien “procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas o de los cuerpos de policía nacionales o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación, o afecte la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado”.

Ecuador: La Ley Orgánica de Comunicación establece: Art. 4.- Contenidos personales en internet. Esta ley no regula la información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet.
Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet.

El Salvador: El 1 de febrero de 2022 la Asamblea Legislativa aprobó cinco modificaciones al Código Procesal Penal para combatir los delitos informáticos. La reforma, entre otros cambios, autoriza "operaciones encubiertas digitales que resulten necesarias", bajo aprobación de la Fiscalía General de la República. La reforma también autoriza la presentación en los procesos judiciales de evidencia digital definida como "documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, vídeos, datos y cualquier tipo de información que sea almacenada, recibida o transmitida a través de las tecnologías de la información y comunicación o por medio de cualquier dispositivo electrónico".

<https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/68C8065D-79E5-4673-9EAF-E078672C4A22.pdf>

Grenada: On September 9, 2013, the Parliament has passed a law to sanction offensive online content, which could punish defamation through the Internet with up to one year in prison. The legislation is a part of the Electronic Crimes Act of 2013, which defines and establishes sanctions for 16 offenses, including laws regarding child pornography, online stalking, identity theft, violation of privacy and electronic terrorism. The law also aims to tackle defamation of individuals on the Internet by punishing information that is "grossly offensive" or that is known to be false but is spread to cause "annoyance...insult, injury...ill will." It would include communications through email, posts on social media and comments on online articles, and offenders may pay a fine of up to EC\$100,000 (or US\$37,037) or spend up to a year in prison. On September 23, 2013, the law is not in effect yet; it is waiting the approval of Governor-General Cecile la Grenade.

Guatemala: El 4 de agosto de 2022, el Congreso de la República de Guatemala aprobó con el decreto 39-2022, la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, la cual fue elaborada con el objetivo de proteger integralmente a las personas, sus bienes y derechos, relativo a los sistemas que utilicen tecnologías de la información. La normativa constaba de 44 artículos en los cuales se intentaron regular los avances de las tecnologías de la información y las comunicaciones, creando una ley especial que defina las conductas delictivas a fin de proteger los datos personales e intimidad informática con mayor énfasis a los niños y adolescentes, que son los más vulnerables a grupos ilícitos que operan a través de las redes sociales.

Sin embargo, la normativa, aunque detalla la definición de algunos términos crea nuevos delitos, como el acoso por medios cibernéticos o ciberacoso, creando una brecha legal con diversas interpretaciones que podrían, incluso, servir como herramienta legal con fines represivos, prohibiendo el divulgar imágenes de sátira o información sobre funcionarios públicos y políticos, quienes podrían alegar verse afectados por su honor, dignidad, la de su familia y otros entornos sociales.

Veinte días después, el 24 de agosto, los congresistas decidieron archivarla iniciativa luego de que opositores expusieran que el decreto podría servir como un instrumento para "acallar a la prensa y perseguir a opositores".

En febrero de 2018 el Congreso discute [La Ley 5239 contra actos terroristas](#) que establece penas de entre 10 y 20 años de prisión contra quienes “con fines económicos, políticos, religiosos, ideológicos, militares y cualquier otro utilicen medios de comunicación, informática, tecnologías de información, electrónica o similar con el objeto de generar temor, causar alarma, intimidar o compeler al Estado o Gobierno”. La sociedad civil expresó preocupaciones relacionadas al proyecto que podría restringir las libertades de prensa y expresión al penalizar delitos de opinión. El Art. 22 del proyecto bajo el título Terrorismo Cibernético y Medios de Comunicación, “abre una ventana peligrosa para la censura previa y para censurar contenidos en cualquier tipo de plataforma informativa de los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales, así sean investigaciones sobre hechos o simplemente opiniones y todo tipo de conversación pública”, dijo la SIP.

Jamaica: En marzo de 2018, el Parlamento impulsa un [proyecto de Ley de Protección de Datos](#) que obliga a las personas y organizaciones, incluyendo a los medios de comunicación, considerados como "controladores de datos" - a someter ante una nueva oficina Comisionado de Información, una descripción de los datos personales en su posesión que haya recibido, almacenado o procesado sobre cualquier ciudadano. Según la iniciativa, el Comisionado de Información tendría amplios poderes sobre las personas, organizaciones y medios para obtener información, pedir la identificación de las fuentes y exigir rectificaciones. Las sanciones por incumplimiento de la Ley propuesta son variadas e incluyen el encarcelamiento. Esto ha generado polémica y debate público en el país caribeño sobre la libertad de expresión y las garantías legales en apoyo a la libertad de prensa.

México: En octubre de 2015, fue retirado el proyecto de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, presentado por el senador Omar Fayad. La iniciativa que contemplaba castigo de 55 años de cárcel por casos de terrorismo informático, generó polémica y numerosas críticas, por lo que el senador Fayad la retiró de la discusión del Congreso a principios de noviembre 2015. (El País, España, 4 nov. 2015)

Nicaragua: El 27 de octubre de 2020 fue sancionada la Ley Especial del Cibercrimen, conocida como "Ley Mordaza" o "Ley Bozal". El objetivo de la ley es la preservación, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías y la comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilizan dichas tecnologías, sus contenidos y cualquiera de sus componentes". Castiga entre dos y cuatro años de prisión a "quienes usando la tecnología de la informática y de la comunicación publiquen o difundan información falsa y/o tergiversada que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a su familia". La ley se aplicará dentro y fuera del territorio nacional.

Panamá. En Panamá los delitos informáticos son parte del Código Penal y no han sido invocados mayormente contra periodistas o medios de comunicación. En cuanto a los aparatos no tripulados, la regulación panameña obliga a su registro ante

la Autoridad de Aeronáutica Civil y prohíbe su uso en áreas sensitivas como aeropuertos, puertos, cuarteles de policía o instalaciones de seguridad pública, así como las cárceles y recintos penitenciarios del país.

Paraguay: La Ley 4439/11 sobre Delitos informáticos modificó el Código Penal.

Perú: En julio de 2015, se discuten dos normas que podrían reglamentar el uso de los drones: el proyecto de ley P.L. N° 4416/2014-CR y el proyecto de norma técnica complementaria (NTC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El proyecto P.L. N° 4416/2014-CR se basa en la legislación española que prohíbe que los drones sobrevuelen zonas urbanas privadas e incluye también una limitación sobre el tipo de actividades que se pueden desarrollar con estos equipos. La norma del MTC propone algo similar a la anterior y no permite el uso de drones con fines comerciales, solo en el ámbito de seguridad nacional. El 22 de octubre del 2013, se publica la Ley N° 30096, Ley de delitos informáticos. El 10 de marzo del 2014, se publica la Ley 30171, que modifica la Ley N° 30096.

Puerto Rico: El Código Penal contiene disposiciones que permiten el encausamiento de delitos informáticos en los Artículos 167 (recopilación ilegal de información personal), 168 (grabación ilegal de imágenes), 169 (grabación de comunicación por un participante), 171 (violación de comunicaciones personales), 172 (alteración y uso de datos personales en archivos), y 173 (revelación de comunicaciones y datos personales). Además, la Ley 165-2008 (conocida como la “Ley de Regulación de la Programación de Espionaje Cibernético” establece prohibiciones en cuanto al uso o instalación de “Spyware”. Nota: las leyes y reglamentos federales de los Estados Unidos de América aplican en Puerto Rico, lo que incluye los delitos de informática tipificado bajo dichas leyes y la regulación de aparatos no tripulados (“drones”).

República Dominicana: El 14 de junio de 2022 el presidente Luis Abinader presentó al Congreso un proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, que reemplazará la Ley 5307 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en vigencia. El nuevo proyecto aumenta de uno a cuatro años la pena de cárcel por difamación y mantiene el delito de injuria con una multa de 500 salarios mínimos, sin cárcel. El proyecto obliga a los proveedores de servicios que eliminen material considerado discriminatorio en 24 horas, para evitar multas.

San Vicente y las Granadinas: El 12 de agosto de 2016 fue aprobada la Ley de Delitos Informáticos 2016 (Cybercrimen Act 2016). Contempla hasta dos años de prisión por difamación cometidos en línea.

Venezuela: El 8 de noviembre 2017 fue aprobada por unanimidad la “[Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia](#)” que contempla en sus estatutos el castigo con penas hasta de 20 años de cárcel por “incitación al odio”, condición que se puede atribuir a manifestantes en la vía pública que protestan contra el gobierno o que expresen críticas y opiniones en

	<p>redes sociales y medios de comunicación. También considera penalidades contra los medios que trasmitan propaganda y contra partidos políticos que promuevan "el fascismo".</p> <p>La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos de 2010 obliga a los medios y proveedores de internet a censurar, bloquear o, al menos, filtrar información que contravenga algunas de sus disposiciones. El artículo 27 destaca que "los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes" que, por ejemplo, "fomenten zozobra en la ciudadanía", "alteren el orden público", "desconozcan a las autoridades" o "induzcan al homicidio". La Ley también responsabiliza a los medios de comunicación, entre otros, por los mensajes que inciten al odio, hagan apología del delito, motiven la intolerancia política y religiosa o a desconocer a las autoridades. Los infractores de la Ley recibirán multas de entre 50 y 200 unidades tributarias y los responsables de medios electrónicos que incumplan, serán sancionados hasta con un 4% de los ingresos brutos previo a la violación. La ley tipifica penalmente aquellas informaciones o críticas que la autoridad considere como desacato y ofensiva o que incite a transgredir dictámenes oficiales. Prohíbe la figura del anonimato en internet.</p> <p>Ley Especial contra los Delitos Informáticos, Gaceta Oficial Nº 37.313 130 de octubre de 2001.</p>
<p>Libertad / regulaciones en la red</p>	<p>Argentina: en 2022, se inició un proceso participativo de elaboración de una nueva ley de protección de datos personales cuyo marco general puede leerse aquí: https://www.argentina.gob.ar/noticias/presentacion-del-proyecto-de-ley-de-proteccion-de-datos-personales Adepa planteó la necesidad de contemplar a la actividad periodística como un caso especial dentro del ejercicio de la libertad de expresión y diferenciarla de las grandes plataformas de internet.</p> <p>En 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó un fallo de la Cámara Civil que había reconocido el "derecho al olvido" en el caso "Denegri contra Google". Adepa presentó un amicus y tuvo la adhesión de la SIP. La posición puede leerse aquí: https://adepa.org.ar/derecho-al-olvido-adepa-presento-un-escrito-ante-la-audiencia-publica-en-la-corte-suprema/</p> <p>OtraEn noviembre de 2017 las comisiones de Comunicación e Informática, de Defensa del Consumidor y de Justicia de la Cámara de Diputados dictaminaron el proyecto de ley que regula la responsabilidad de los intermediarios de internet. La iniciativa, que había recibido media sanción en el Senado en octubre de 2016, debe ser aprobada por la Cámara de Diputados. "La norma establece que los intermediarios tecnológicos (proveedores de acceso, prestadores de servicios de alojamiento de contenidos, plataformas de comercio electrónico, proveedores de motores de búsqueda, entre otros) no son responsables por el material que generan, publican, o suben los usuarios, salvo cuando tengan conocimiento de ese contenido a partir de una orden judicial."</p>

El 18 de diciembre de 2014, mediante el decreto ejecutivo 2514/14, se promulgó la Ley Argentina Digital. La nueva norma declara a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un "servicio público esencial y estratégico", y garantiza el "acceso igualitario" de los ciudadanos de todo el país. El eje de la ley es que se regula el libre acceso a las redes. As of May 2015, three [...] bills were stalled in the early stages of the legislative process and had not yet been brought up for a vote. Among these bills was a bill known as "The Right to be Forgotten," which would allow users to request that internet intermediaries eliminate or block publications that could violate their right to privacy, honor, and image, so long as the content was not deemed to be of public interest. Another bill that would require ISPs to block content that in any way encourages human trafficking was approved by the Representative's Chamber and was under debate in the Senate as of May 2015. (Freedom on the net 2015, Freedom House, Argentina)

Brasil: En 2014, el Congreso Nacional aprobó el llamado Marco Civil da Internet (LEY Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014). La ley establece principios, garantías, derechos y deberes para el uso de internet en Brasil. La aplicación de la ley fue reglamentada por el Decreto n.º 8.771, de 11 de mayo de 2016, para tratar las hipótesis admitidas de discriminación de paquetes de datos en internet y degradación del tráfico, indicar procedimientos de custodia y protección de datos por parte de los proveedores de conexión y aplicaciones, señalar medidas de transparencia en la solicitud de datos de registro por parte de la administración pública y establecer parámetros de fiscalización y verificación de infracciones. Brasil: Em 2014, o Congresso Nacional aprovou o chamado Marco Civil da Internet (LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014). A lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. A aplicação da lei foi regulamentada pelo Decreto n.º 8.771, de 11 de maio de 2016, para tratar das hipóteses admitidas de discriminação de pacotes de dados na internet e de degradação de tráfego, indicar procedimentos para guarda e proteção de dados por provedores de conexão e de aplicações, apontar medidas de transparência na requisição de dados cadastrais pela administração pública e estabelecer parâmetros para fiscalização e apuração de infrações.

Cuba: El Decreto Ley 35, conocido en agosto de 2021, castiga contenidos críticos y lo que las autoridades consideren como noticias falsas o que inciten a manifestaciones. Considera como una acción altamente peligrosa la "divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, y difamación con impacto en el prestigio del país". El artículo 69 de esta ley autoriza a la empresa estatal Etecsa, única operadora y proveedora de internet en el país, a interrumpir el servicio si llega a presentarse alguno de estos casos.

El Decreto Ley 370 "SOBRE LA INFORMATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD EN CUBA", está en vigor desde el 4 de julio de 2019 y es conocida como "Ley Azote". Supedita el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a las necesidades estatales e impone restricciones al ejercicio de derechos fundamentales implicados en su uso, como la

participación política, la libertad de expresión, la privacidad y el derecho de asociación. Sanciona la difusión de información en redes sociales contrarias al “interés social”, “la moral” y “las buenas costumbres”, categorías que no definen la conducta ilícita e inhiben el debate en el ámbito público y político. Autoriza el castigo y persecución de investigadores en seguridad informática que publican y alertan sobre la existencia de vulnerabilidades en sistemas informáticos. Otorga facultades discrecionales al Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM) para el otorgamiento licencias sobre programas y aplicaciones informáticas. Impide la fabricación, instalación, comercialización de dispositivos asociados a las TIC, sin autorización, afectando el desarrollo de redes comunitarias que garantizan el acceso a internet y reducen la brecha digital. Impide el hospedaje de sitios web ubicados en servidores extranjeros que no sean réplicas de los servidores nacionales, declarando ilegales los blogs personales y medios independientes a los que se les niega acceso al dominio “.cu”; permitiendo al Gobierno controlar y acceder a la información personal de los usuarios.

Ecuador: El 23 de mayo de 2017 el presidente Rafael Correa sometió a la Asamblea Nacional el proyecto de “Ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet”. Entre otras sanciones, la norma impone castigo a los prestados de servicio y a las plataformas por donde transitan los contenidos.

Estados Unidos: El 24 de mayo de 2021 el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que castiga a las empresas tecnológicas como Twitter y Facebook por bloquear a candidatos políticos. La [ley SB 7072](#), aprobada por la Legislatura del estado el 19 de abril de 2021 y entra en vigor el 1 de julio, contempla multas de hasta 250.000 dólares por día a las plataformas que censuren a cualquier candidato a un cargo estatal. También multa con 25.000 dólares por día a las que bloqueen a candidatos en elecciones que no sean en Florida. Permite además a los ciudadanos del estado que sean “tratados injustamente” por las firmas tecnológicas, demandarlas a cambio de compensaciones monetarias.

En junio de 2021, un juez federal bloqueó la aplicación de la ley por considerarla una violación de la Primera Enmienda. Esta decisión se encuentra actualmente en apelación ante el Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito de Estados Unidos.

Del mismo modo, en septiembre de 2021, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó la ley H.B. 20, un estatuto que, si entrara en vigor este diciembre, restringiría las prácticas de moderación de contenidos de las plataformas de medios sociales para combatir su percepción de parcialidad. En concreto, la ley prohibiría a las plataformas de redes sociales con más de 50 millones de usuarios mensuales activos moderar los contenidos en función del "punto de vista" del usuario, término que no define. La ley también permite al fiscal general de Texas demandar a las plataformas para hacer cumplir estas restricciones. Está pendiente en un tribunal federal una demanda contra Abbott que pretende bloquear la H.B. 20 por motivos de la Primera Enmienda.

On May 24, 2021, Florida governor Ron DeSantis has signed in the [Law 7072](#), a restriction on social media companies' ability to ban candidates for state offices and news outlets. The law provides several new checks on tech and social media companies. Among other things: platforms cannot ban or deprioritize candidates for state office, platforms cannot ban or deprioritize any news outlet meeting certain size requirements, platforms must be transparent about moderation processes and give users notice of moderation actions, and users and the state will have the right to sue companies that violate the law. Statutory fines could be as high as \$250,000 per day for some offenses. In June 2021, a federal judge blocked enforcement of the law as a violation of the First Amendment. That decision is currently on appeal to the U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit.

Similarly, in September 2021, Texas Governor Greg Abbott signed into law H.B. 20, a statute that, were it to take effect this December, would restrict social media platforms' content moderation practices in order to combat their [perceived bias](#). Specifically, the law would prohibit social media platforms with more than 50 million active monthly users from moderating content based on user's "viewpoint"—a term it does not define. The law also permits Texas's attorney general to sue platforms to enforce these restrictions. A lawsuit against Abbott seeking to block H.B. 20 on First Amendment grounds is [pending in federal court](#).

Honduras: En febrero de 2018 el Congreso inició la discusión sobre el proyecto de Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y las Redes Sociales, generando polémica en distintos sectores del país. La iniciativa establece obligaciones a los administradores de sitios web y crea el Comité Interinstitucional de Ciberseguridad que lo integrarían 19 organismos del Estado con el objetivo de "formular, diseñar, implementar y vigilar" el cumplimiento de la ley.

México: El Congreso mexicano aprobó en el 2014 una legislación en materia de gobernanza y neutralidad de internet.

Nicaragua: El 13 de marzo de 2018 la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que se deberán regular las redes sociales para prevenir la violencia y las noticias falsas. Insistió en que se debe modificar el marco jurídico porque hay que "proteger a la niñez, a los jóvenes, del mundo de las noticias falsas" ya que las redes sociales representan "amenazas" para la familia. No se han presentado ningún proyecto al respecto.

Panamá no cuenta con regulaciones específicas en materia de la libertad de expresión exclusivamente aplicables a las redes sociales, salvo el Código Electoral que regula estrictamente la divulgación de información y las campañas de desinformación por esta vía referentes a procesos electorales en curso.

	<p>Paraguay: Ley Nº 5653 / PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONTRA CONTENIDOS NOCIVOS DE INTERNET en su art 7° crea el Observatorio Nacional para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Internet (ONAI) y el 8° establece entre sus funciones la de recibir denuncias sobre prestadores de servicios de internet (ISP) y establecimientos o instituciones de todo tipo que no cumplan con lo dispuesto en la presente Ley y remitir las mismas a las autoridades de aplicación competentes. Como sanción se establece que los proveedores de servicios de internet (ISP) que no cumplan con lo dispuesto en la presente Ley, serán sancionados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), de acuerdo a la gravedad de la infracción y al carácter de reincidente del infractor con una pena de multa de entre el 0,1% (cero coma uno por ciento) al 3% (tres por ciento) de los ingresos brutos totales percibidos por la prestación de servicios de telecomunicaciones, en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquel en el cual se cometió la infracción.</p> <p>Los establecimientos públicos o privados que incumplan lo dispuesto en la presente Ley, serán sancionados por las intendencias municipales, de acuerdo con la gravedad de la infracción y al carácter de reincidente del infractor con una pena de multa de entre 10 (diez) a 200 (doscientos) jornales mínimos.</p> <p>En este momento la reglamentación de la Ley está en estudio.</p>
<p>Leyes específicas de prensa</p>	<p>Argentina: El gobierno del presidente Mauricio Macri anunció el 30 de diciembre de 2015 mediante decreto de necesidad y urgencia (DNU), la derogación de artículos de las leyes de medios audiovisuales y de telecomunicaciones. También decretó la fusión de las autoridades federales de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afscsa) y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic), organismos que quedarán unificados en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).</p> <p>La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, N° 26522, fue aprobada el 10 de octubre de 2009, sustituyó a la ley de radiodifusión (decreto-ley 22.285) aprobada en 1980 durante la dictadura militar. El 29 de octubre de 2013 la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161 de la ley, referentes a la propiedad de medios de comunicación, que habían sido cuestionados por Grupo Clarín y otros medios de comunicación. La sentencia de la Corte incluyó advertencias. "Todo lo que se ha dicho acerca de la ley y su propósito de lograr pluralidad y diversidad en los medios masivos de comunicación perdería sentido sin la existencia de políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial. La función de garante de la libertad de expresión que le corresponde al Estado queda desvirtuada si por la vía de subsidios, del reparto de la pauta oficial o cualquier otro beneficio, los medios de comunicación se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas. Lo mismo ocurre si los medios públicos, en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios al servicio de los intereses gubernamentales". Los jueces sostuvieron que los fines de la ley quedan desvirtuados si el órgano de aplicación no es independiente, no se ajusta a los principios de la Constitución o a los de los tratados internacionales con rango constitucional, o si tiene un trato discriminatorio o no garantiza el derecho de los ciudadanos al acceso de información plural.</p>

El 30 de mayo de 2013, la cámara legislativa de Buenos Aires aprobó una iniciativa, encabezada por el jefe del Gobierno capitalino Mauricio Macri (opositor al gobierno de Cristina Kirchner) para proteger la libertad de prensa y expresión. La norma - aprobada con 35 votos a favor y 15 en contra- establece en el ámbito capitalino un fuero judicial especial para que intervenga en asuntos que pongan en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión.

Barbados: The Supreme Law is the Constitution of this country. The Supreme Law guarantees the freedom of expression. As defined by the Courts that expression includes freedom of the press. The Fundamental Rights Freedom Chapter of the Barbados Constitution guarantees the freedom of the Press.

Bolivia: La Ley de Imprenta, vigente desde el 19 de enero de 1925. A finales de 2011 el gobierno promovió un debate sobre una nueva ley de prensa.

Brasil: El 30 de abril de 2009, el Supremo Tribunal Federal de Brasil abolió (derogó, eliminó) la Ley de Prensa de 1967, impuesta por la dictadura militar.

La Constitución brasileña de octubre de 1988, en su artículo 220, garantiza que la manifestación del pensamiento, la creación, la expresión y la información, en cualquier forma, proceso o vehículo, no sufrirán restricción alguna, con sujeción a lo dispuesto en la Constitución. También establece que ninguna ley contendrá disposición alguna que pueda constituir un obstáculo a la plena libertad de información periodística en cualquier vehículo de comunicación y prohíbe toda censura de carácter político, ideológico y artístico.

En 2015 se publicó y sancionó la Ley Nº 13.188/2015, que regula el ejercicio del derecho de réplica o rectificación del ofendido en un asunto divulgado, publicado o transmitido por un vehículo de comunicación social, según lo dispuesto en la Constitución.

Brasil: Em 30 de abril de 2009, o Supremo Tribunal Federal considerou não recepcionada pela Constituição de 1988 (o que equivale a declarar inconstitucional) a Lei de Imprensa (Lei nº 5250/67) imposta pela ditadura militar.

A Constituição Brasileira, de outubro de 1988, em seu art. 220 garante que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na Constituição. E determina ainda que nenhuma lei conterà dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social e veda toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

Em 2015 foi publicada e sancionada a Lei n.º 13.188/2015, que disciplina o exercício do direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, conforme previsão constitucional.

Canadá: No existen leyes específicas de prensa (There are no specific press laws in Canada).

Chile: El 25 de febrero de 2022 el pleno de la Convención Constitucional aprobó el primer informe de la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio, sobre normas referidas al reconocimiento de los derechos digitales y culturales, así como la libertad de prensa. Se respaldó el artículo que establece el deber del Estado de respetar la libertad de prensa, velar por el pluralismo de los medios de comunicación y por la diversidad de opiniones, siendo esto consustancial a la democracia y su fortalecimiento; además de prohibir la censura previa. Asimismo, el derecho de toda persona ofendida o injustamente aludida por un medio de comunicación e información a que su aclaración o rectificación sea difundida gratuitamente por el mismo medio en que hubiese sido emitida; con pleno respeto a la libertad de expresión. En cuanto a derechos digitales se definió que todas las personas tienen derecho al acceso universal, conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación. Además, que el Estado garantizará el cumplimiento del principio de neutralidad en la red. Otro punto aprobado de la propuesta de la comisión es el reconocimiento del derecho de todas las personas a una vida libre de violencia en cualquier plataforma o medio digital, con especial énfasis en los grupos históricamente excluidos.

La [Ley 19.733 Sobre libertades de información y de opinión](#), de 4 de junio de 2001, derogó la normativa contenida en la Ley de Abusos de Publicidad, de 1967.

Colombia: La última ley de prensa aprobada en Colombia fue la ley 29 de 1944. La mayoría de sus disposiciones, así como las contenidas en el decreto Reglamentario 109 de 1944, han sido derogadas de manera expresa o tácita por leyes posteriores y por la Constitución de 1991. Las normas relacionadas con el derecho de rectificación no han sido derogadas de manera expresa, pero se ha entendido que tal derecho se rige por el artículo 20 de la Constitución política y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Cuba: La ley vigente se torna específica sólo para la prensa extranjera. Faculta al Centro Internacional de Prensa (CPI) para suspender temporalmente o retirar definitivamente la acreditación de prensa «cuando el titular realice acciones impropias o ajenas a su perfil y contenido de trabajo, así como cuando se considere que ha faltado a la ética periodística y/o no se ajuste a la objetividad en sus despachos. Las medidas de la Ley 88 sobre la Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba se han utilizado para castigar la crítica y sancionar a los disidentes que trabajan para medios extranjeros.

Ecuador: Para febrero de 2022, además de la Ley de Comunicación, existen otras leyes vigentes consideradas restrictivas del goce y ejercicio práctico del derecho a la libertad de expresión y a la difusión de publicidad en el país. La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) desglosó [aquí](#) todos los artículos que afectan a la libertad de expresión en la Constitución, en el Código Orgánico Integral Penal, en el Código de la Niñez y Adolescencia, en la Ley de la Defensa al Consumidor, en el Código Orgánico, monetario y Financiero Libro I, en La Ley Orgánica Electoral y Código de la Democracia, en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y algunos reglamentos emitidos por la Presidencia.

El 11 de enero de 2022 la Asamblea Nacional clausuró el primer debate de cambios a Ley de Comunicación, tras una propuesta enviada por el presidente Guillermo Lasso a la Legislatura el 25 de mayo de 2021. El [proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación](#), busca derogar el 94% de los artículos de la norma vigente desde 2013 y que el nuevo estatuto respete estándares internacionales sobre la labor periodística. La discusión debe pasar a segundo debate. Durante su gobierno (2017 – 2021), el presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea el [proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación](#) que no fue aprobado.

El 9 de mayo de 2021 [la AEDEP solicitó al presidente Moreno vetar por completo el proyecto de reforma penal contra la violencia digital](#), aprobado por la Asamblea el 6 de mayo del 2021. La organización consideró “necesario un debate serio, pormenorizado, que contenga enunciados claros”. Pidió además a Moreno posibilitar que el presidente electo, Guillermo Lasso, trabaje con la Asamblea en un nuevo proyecto de ley de Violencia Digital en donde se contemple la protección a las víctimas del acoso digital, sin dejar de lado el derecho a la libertad de prensa.

La Ley Orgánica de Comunicación fue aprobada el 14 de junio de 2013 con 108 votos a favor y 26 en contra. La norma regula contenidos periodísticos, impone sanciones administrativas y económicas, establece la obligatoriedad de título universitario para los periodistas y crea la figura de “linchamiento mediático”. Establece un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con potestad para sancionar el incumplimiento de las normas o respuesta y crea la Superintendencia de Información y Comunicación con atribuciones de vigilancia, auditoría, intervención y control del comportamiento de los medios, y se encargará del cumplimiento de la ley y de las penas impuestas. Fue ratificada por el presidente Rafael Correa el 22 de junio; entró en vigencia el 25 de junio.

Estados Unidos: Si bien no existe ley que afecte a la prensa, prohibición que radica en la Primera Enmienda, sí se promulgaron leyes y decretos que favorecieron la libertad de prensa y el periodismo, entre ellas el “Daniel Pearl Freedom of Press Act, signed by President Barack Obama on May 17, 2009, which honors the Wall Street Journal reporter killed in Pakistan in 2002. The legislation encourages the State Department to identify countries that censor journalists and subjects them to physical attacks and imprisonment.

United States: While the U.S. does not permit laws infringing on freedom of the press, a prohibition that is enshrined in the First Amendment, there have been some promulgated laws and decrees in favor of freedom of the press and journalism, among them the Daniel Pearl Freedom of the Press Act (<https://www.govtrack.us/congress/bills/111/hr3714/text>), signed by President Barack Obama on May 17, 2009, which honors the Wall Street Journal reporter killed in Pakistan in 2002. The

legislation encourages the State Department to identify countries that censor journalists and subject them to physical attacks and imprisonment.

Guatemala: La Ley de Emisión del Pensamiento, establecida por decreto constitucional el 28 de abril de 1966. La Ley General de Telecomunicaciones (LGT) fue reformada por el Congreso el 19 de noviembre de 2012 y entró en vigencia el 6 de diciembre de 2012. La reforma amplía el plazo de usufructo del espectro radioeléctrico a 20 años, prorrogables a solicitud del titular por periodos iguales. Sectores vinculados a las radios comunitarias consideraron que la reforma perjudica a los pequeños medios de comunicación.

Honduras: La Ley de Emisión del Pensamiento contiene una serie de disposiciones relativas a la libertad de expresión, a las publicaciones, a la ética periodística y las responsabilidades; vigente desde el 26 de agosto de 1958.

México: Ley de Imprenta de 1917.

Nicaragua: En marzo de 1990 fue derogada la ley general sobre los medios y la comunicación social por medio de la Ley 78.

Panamá: No existe Ley de Prensa. Las disposiciones que regulaban esa materia fueron derogadas por la Ley 22 del 29 de junio de 2005. Una tendencia positiva es que Panamá aprobó por medio de la Ley 125 del 4 de febrero del 2020 el “Por la cual se aprueba el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”, mejor conocido como Acuerdo de Escazú. Este acuerdo impulsado por la sociedad civil latinoamericana codifica con un estándar regional las normas de transparencia, acceso a la información pública y acceso a la justicia. Aunque la intención original de los promotores estaba dirigida a las temáticas ambientales, los principios generales contenidos en este acuerdo benefician a todos los temas de interés público. Se espera que en los próximos años, ya sea por medio del desarrollo jurisprudencial de los tribunales panameños, o por la acción concertada de la comunidad internacional el Acuerdo de Escazú se convierta en un pilar de las libertades de expresión e información.

Paraguay: No existen normas legales que regulen específicamente la actividad de la prensa escrita.

Perú: La última ley de prensa el Decreto Ley N° 22244 del año 1978 fue derogada el año 1981.

Puerto Rico: En el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no existe una ley de prensa específica sino varias disposiciones que afectan el contenido de la información y/o exigencias sobre la forma de revistas o periódicos.

	<p>República Dominicana: La Ley no. 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento, en vigencia desde el 15 de diciembre de 1962, regula el ejercicio de los medios de comunicación escritos, radiales y audiovisuales. En junio de 2013 el Congreso estudia un proyecto para la modificación de la Ley de Libre Expresión y Medios de Comunicación. La propuesta de reforma fue presentada en 2011. En febrero de 2013 varios medios presentaron una demanda por inconstitucionalidad contra algunos artículos referentes a penas contra periodistas y responsabilidad de directores de medios.</p> <p>Uruguay: Ley de Comunicaciones e Informaciones, “Ley de Prensa, Ley Nº 16.099 del 3 de noviembre de 1989, denominada “Ley de Prensa”. El 22 de diciembre de 2014, fue aprobada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como ley de medios). Cuenta con 86 artículos que regularán la radio y la televisión no así Internet ni las redes sociales. La ley tendría como objetivo evitar la creación de monopolios y de oligopolios. El presidente electo Tabaré Vázquez anunció que luego de su asumir el poder en marzo de 2015 tiene previsto reglamentar la ley. En junio de 2014 la SIP (Claudio Paolillo) participó en una audiencia parlamentaria en la que expuso sus consideraciones, entre éstas que la iniciativa contiene elementos que amenazan la vigencia del derecho a la libertad de expresión y consideró como contradictorio con el espíritu de la ley la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) que estará integrado por funcionarios designados por el poder político, con atribuciones para imponer mecanismos de autorregulación a los medios e interferir en sus contenidos y políticas editoriales. Se cuestionó además que el proyecto califique la información como de “servicio público” y que los medios sean considerados “estratégicos para el desarrollo nacional”, lo cual abriría las puertas para intervenciones arbitrarias del Estado en los contenidos que sean difundidos.</p> <p>Venezuela: El 20 de diciembre de 2010 la Asamblea Legislativa aprobó la reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos que modificó la Ley del 2004, conocida como Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, (Ley Mordaza o Ley de Contenidos).</p>
<p>Otras leyes que afectan la libertad de prensa</p>	<p>Argentina: La ley de equidad en los medios, aprobada por el Congreso desde 2021, pero no reglamentada. Podría afectar indirectamente a los medios privados, vía la injerencia del estado en temas como el lenguaje inclusivo, como uno de los puntos a tener en cuenta para adjudicar pauta oficial.</p> <p>El 11 de septiembre de 2013, fue sancionada la Ley sobre la Convivencia y el Abordaje y la Conflictividad en la Escuela (Ley contra el bullying).</p> <p>Bolivia: El 8 de octubre de 2010, fue promulgada la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, cuyos artículos 16 y 23 fueron cuestionados por su ambigüedad al incurrir en serias restricciones a la libertad de prensa al responsabilizar a los medios por difundir expresiones o ideas racistas o discriminatorias, impone además fuertes sanciones económicas y retiro</p>

temporal de licencias. El Reglamento de Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, DECRETO SUPREMO Nº 762, fue aprobado el 5 de enero de 2011.

En enero de 2018 fue promulgada un decreto sobre la difusión obligatoria de campañas en los medios de comunicación contra la violencia a menores de edad. La medida impone que las televisoras difundan mensajes del Ministerio de Justicia de manera gratuita durante 15 minutos al mes, las emisoras por 25 minutos y los diarios publiquen una página al mes.

El 1 de septiembre de 2018 fue promulgada la Ley de Organizaciones Políticas que en su artículo 74 sobre "Acceso a propaganda en medios de comunicación en año electoral", la ley establece que "en períodos electorales, los medios de comunicación audiovisuales e impresos que se habiliten para la difusión de propaganda electoral cederán gratuita y obligatoriamente al Órgano Electoral Plurinacional la misma cantidad de espacio y tiempo que éste les contrate para la implementación del fortalecimiento público".

Brasil: En 2023, existen proyectos de ley en curso que buscan restringir la publicidad comercial de alimentos, bebidas, juguetes y otros.

Brasil: Em 2023, há vários projetos de lei em tramitação que buscam restringir a publicidade comercial de alimentos, bebidas, de brinquedos e outros.

Chile: Existe un registro de suplementeros, establecido por la [Ley 17.393](#). Se establece, además, que la Asociación Nacional de la Prensa debe suscribir con la Federación de Suplementeros un convenio de distribución, porcentajes, horarios y garantías. La [Ley 20.584, sobre Derechos y Deberes de las Personas en Atención de Salud](#), establece una restricción para el uso de fotografías de pacientes para medios periodísticos, para lo cual se debe contar con su aceptación.

Cuba: La Constitución de la República de Cuba, el Código Penal, la Ley 88 y los decretos-leyes 370 y 35 son usados para frenar las libertades de prensa, información y expresión.

Ecuador: En enero de 2012, se pusieron en marcha cambios a las leyes electorales que prohíbe a los medios la difusión de "mensajes" o "reportajes" que incidan en favor o en contra de alguna "tesis política", o de candidatos o preferencias electorales. La ley otorga al Consejo Nacional Electoral amplias facultades para censurar a medios que considere que no acatan esta prohibición.

México: El 19 de enero de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió una sentencia que ordena que en cualquier contenido de las estaciones de radio y televisión del país se deba diferenciar entre información noticiosa y la opinión de quien la comunica. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) consideró la resolución como un ataque directo e inusitado a la libertad de expresión

Los medios de comunicación están regulados bajo ciertas normas secundarias para controlar sus contenidos, y en caso de violarlas son sancionados con multas económicas.

Nicaragua: En 2020 la Asamblea Legislativa, de mayoría sandinista, aprobó leyes que afectan las libertades de expresión y de prensa.

El 21 de diciembre de 2020 fue aprobada la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que veda la postulación de candidatos que aplaudan “sanciones internacionales”.

El 27 de octubre de 2020 fue sancionada la Ley Especial del Ciberdelito, conocida como "Ley Mordaza" o "Ley Bozal".

El 15 de octubre de 2020 fue sancionada la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, bautizada como Ley Putin por su similitud con una promovida por Vladimir Putin en Rusia en 2014. Con esta ley se controlan las operaciones financieras y las actividades que realizan asociaciones, organizaciones nacionales o extranjeras bajo el argumento de que se pone así fin a la injerencia extranjera. La ley perjudica el financiamiento de los partidos políticos, organizaciones de oposición y a los medios de comunicación que reciben ayuda de diferentes fundaciones. La Ley exige inscribirse como "agente extranjero" y declarar con anterioridad cualquier donación para ser aprobada por el Ministerio de Gobernación.

El 18 de enero de 2021 se instauró la cadena perpetua por “delitos de odio” y se reformó el Código Procesal Penal, para ampliar hasta 90 días el plazo por el que una persona puede estar detenida sin ser acusada, medida aplicada a numerosos precandidatos a las elecciones presidenciales de noviembre de 2021.

En mayo de 2015, el Poder Ejecutivo promueve una iniciativa para modernizar las telecomunicaciones. La propuesta Ley de Promoción y desarrollo de la Red Nacional de Servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha aún no ha sido sometida a la Asamblea Nacional. Los críticos de la propuesta consideran que la propuesta busca el control de Internet mediante la creación de una empresa estatal que administre los servicios de banda ancha.

Panamá: La Ley 81 del 26 de marzo de 2019 regula la protección de datos personales siguiendo los principios generales de la regulación de la Unión Europea. En principio, la Ley no entra en conflicto con la de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ni con el ejercicio del periodismo. Sin embargo, la interpretación de diversas entidades administrativas del Estado panameño invoca esta Ley para impedir el acceso a la información pública. En octubre de 2022 se presentó un proyecto de reforma a la ley, pero la misma no ha avanzado en la Asamblea Nacional que garantizaría que dicha norma no pueda usarse para restringir el ejercicio del periodismo, el uso de información pública o el acceso de la información.

Algunas lideresas políticas y servidoras públicas han invocado las normas contra la violencia de género para silenciar coberturas periodísticas y denunciar penalmente a periodistas, sobre todo de medios digitales.

Paraguay: Ley N° 834/86 -Que establece el Código Electoral Paraguayo DE LA PROPAGANDA ELECTORAL

Artículo 290.- El objeto de la Propaganda electoral es la difusión de la plataforma electoral, así los planes y los programas de los partidos, movimientos políticos y alianzas, con la finalidad de concitar la adhesión del electorado. Es la responsabilidad de los partidos, movimientos políticos y alianzas que propician las candidaturas, cuidar que los contenidos en el mensaje constituyan una alta expresión de adhesión a los valores del sistema republicano y democrático y contribuya a la educación cívica del pueblo.

Se entiende por propaganda electoral la exposición en la vía y espacios públicos de pasacalles, pintatas y afiches que contengan propuestas de candidatos o programas para los cargos electivos; espacios radiales o televisivos con mensajes que llaman a votar por determinados candidatos o propuestas; espacios en periódicos (diarios, revistas, semanarios) con propuestas de candidaturas o programa de gobierno.

La propaganda electoral se extenderá por un máximo de sesenta días contados respectivamente desde dos días antes de los comicios, en los que está prohibida toda clase de propaganda electoral. En los comicios internos de los partidos políticos, la propaganda electoral no podrá exceder de treinta días.

La propaganda electoral a través de los medios masivos de comunicación social se extenderá por un máximo de treinta días, contados retroactivamente desde dos días antes de los comicios. En los comicios internos de los partidos políticos, no podrá exceder de diez días. Artículo 302.- A los efectos de contribuir al proceso de democratización del país y la consiguiente educación cívica del pueblo paraguayo, los medios masivos de comunicación social, oral y televisivo destinarán, sin costo alguno el tres por ciento de sus espacios diarios, para la divulgación de las bases programáticas de los partidos, movimientos políticos y alianzas que participen en las elecciones, durante los diez días inmediatamente anteriores al cierre de la campaña electoral. A los mismos efectos y durante el mismo lapso, los periódicos destinarán una página por edición. La distribución del espacio será hecha por la Justicia Electoral en forma igualitaria entre los partidos, movimientos políticos y alianzas, y no se computará a los fines establecidos en el artículo anterior.

Puerto Rico: La Ley 122-2019, conocida como la “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico” mediante la cual se establece como política pública que el manejo efectivo de datos gubernamentales es esencial para apoyar los procesos de innovación de todos los sectores en Puerto Rico, el facilitar una cultura de mejoramiento continuo y de rendición de cuentas en el organismo gubernamental, el desarrollo y crecimiento económico sostenible, y el generar resultados tangibles, de valor y de impacto a los ciudadanos. La Ley 122-2019 contiene los criterios mediante los cuales una agencia gubernamental puede reclamar la confidencialidad de datos públicos y establece una serie de excepciones al requisito de divulgación de datos públicos. Ver: <https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/122-2019.pdf>.

	<p>La Ley 144-2019, conocida como la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública” establece una política pública de acceso a la información pública; así como mecanismos procesales de acceso a los documentos e información pública. Ver: https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/bvirtual/leyesreferencia/pdf/141-2019.pdf.</p> <p>El Canon 15 de Ética Judicial prohibía el uso de cámaras fotográficas y de vídeo en los tribunales de Puerto Rico, sin embargo, ante el reclamo de décadas de organismos de prensa y medios el Tribunal Supremo de Puerto Rico autorizó en abril de 2013 un plan piloto que permite el acceso de los fotoperiodistas y el uso con sus equipos de audio y vídeo, y dispositivos celulares y tabletas para la cobertura y transmisión en directo de los procesos judiciales.</p> <p>Venezuela: Otras leyes que afectan la libertad de expresión en el país: Ley Orgánica de Telecomunicaciones del 7 de febrero de 2011. Código Orgánico Procesal Penal Decreto N° 9.042 12 de junio de 2012. Ley de Infogobierno. Ley de la Función Pública de Estadística. Ley de Reforma Parcial del Código Penal (Gaceta Oficial Número N° 5.768 del 13-04-05-). Ley Orgánica de Procesos Electorales. Ley Orgánica del Poder Electoral. Ley Orgánica de Seguridad de la Nación - Gaceta Oficial Número: 37.594 del 18-12-02. Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentación entre los Órganos y Entes del Estado - Gaceta Oficial N° 39.945 de fecha 15 de junio de 2012. Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente - G O. (5859E de 10/12/2007). Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia - G. O. (38668 de 23 /4/2007). Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción. Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas - Gaceta Oficial N° 37.076 13 de diciembre de 2000. Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Salas de Uso de Internet, Videojuegos y otros Multimedias - G. O. (38529 de 25/9/2006). Ley Orgánica de Educación.</p>
Publicidad oficial	<p>Argentina: El 25 de agosto de 2016, el gobierno del presidente Mauricio Macri emitió una resolución mediante la cual establece nuevos mecanismos y criterios de asignación y fija algunas restricciones a la propia administración nacional para la distribución de la publicidad oficial.</p> <p>El 4 de diciembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia resolvió a favor de Editorial Perfil en su reclamo a para que el gobierno le entregue publicidad oficial. La Corte confirmó la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.</p>

En febrero de 2014, la Corte Suprema de Justicia ordenó al gobierno que incluya a Artear-Canal 13 (Grupo Clarín), en el reparto de la publicidad oficial. La decisión indicó que la asignación debe guardar proporción con lo atribuido a otros canales de aire. Y ratificó la condena del uso de los recursos públicos para intentar disciplinar a un medio.

El 2 de marzo de 2011, la Corte Suprema de Argentina ordenó al Estado a que evite discriminaciones y mantenga un "equilibrio razonable" en el reparto de la publicidad oficial, tras una demanda interpuesta por el periódico Perfil por la política discriminatoria del Gobierno ese medio y dos revistas del grupo, excluidas de la publicidad oficial.

Previamente, el 11 de febrero de 2009, un fallo en segunda instancia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, obligó al gobierno argentino a otorgarle publicidad al diario Perfil.

El 5 de septiembre de 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló contra el gobierno de la provincia de Neuquén por el retiro de la publicidad oficial del diario Río Negro. La sentencia de la estableció que el Estado “no puede manipular la publicidad, dándola y retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios”. El gobierno de Tierra del Fuego emitió un decreto para regular la distribución de la publicidad oficial en esa provincia en 2008.

Existe un dictamen unificado de mayoría sobre la regulación de la publicidad oficial, que se aprobó con mayoría opositora en octubre del 2010 en las comisiones de Diputados, junto a dos dictámenes oficialistas de minoría, lo cual permite que se pueda tratar directamente en el recinto de la Cámara de Diputados.

Comenzó a mediados de 2010 la discusión en el Congreso sobre proyecto de ley para el uso de recursos públicos para la publicidad oficial.

En noviembre de 2011 el juez Luis Mures falló a favor de la acción de amparo interpuesta por el Diario de Madryn S.A. contra el Gobierno de Mario Das Neves, de la provincia del Chubut, por la interrupción intempestiva de la pauta publicitaria que ese diario recibía del Estado, a título de abono por la obligatoria publicación de los actos de Gobierno. La justicia condenó al Poder Ejecutivo Provincial “a cesar de inmediato su decisión de reducir la pauta publicitaria al Diario de Madryn, y que las futuras contrataciones, sean adjudicadas a este con un criterio compatible con las razones expuestas y respetando un equilibrio razonable con aquellos medios gráficos de características análogas”. La interrupción de la publicidad oficial –según el diario- se produjo como castigo por su labor periodística, ya que en 2010 advirtió públicamente que el gobernador aplicaba “nepotismo”, garantizando puestos de trabajo a gran parte de su familia y amigos. Desde ese día y por orden del propio Gobernador, todos los organismos Provinciales retiraron sus avisos. La Justicia ordenó el cese de toda persecución y/o exclusión de la información a dicho diario, y se restituya de inmediato la pauta publicitaria en cuestión.

Bolivia: El 18 de enero de 2018 fue aprobado un [decreto oficial que obliga a todos los medios a difundir de manera gratuita mensajes del gobierno](#), sin distinguir entre empresa públicas y privadas. Se trata de la difusión obligatoria en los medios de

campañas contra la violencia a menores de edad. La medida impone que las televisoras difundan mensajes gratuitos del Ministerio de Justicia durante 15 minutos al mes, las emisoras por 25 minutos y los diarios publiquen una página al mes.

Brasil: En 2023, hay proyectos de ley en curso destinados a forzar al gobierno a destinar porcentajes de publicidad institucional para ciertas regiones del país, así como para periódicos alternativos o de barrios, en detrimento de los medios técnicos. Por otro lado, la Ley 6.015/1976 exige la publicación de los actos y estados financieros de las sociedades anónimas en periódicos de amplia circulación, y la Ley 14.133/21 determina que los órganos de la Administración Pública deben publicar los anuncios de licitación en periódicos de amplia circulación.

Brasil: Em 2023, há projetos de lei em tramitação que visam obrigar o governo a destinar percentuais de publicidade institucional para determinadas regiões do país, bem como para jornais alternativos ou de bairros, em detrimento da mídia técnica.

Por outro lado, a Lei 6.015/1976 obriga a publicação de atos e demonstrações financeiras das sociedades anônimas em jornais de grande circulação, bem como a Lei 14.133/21 determina que os órgãos da Administração Pública devem publicar os editais de licitações em jornais de grande circulação.

Chile: No hay un requerimiento legal de que la publicidad estatal debe distribuirse de forma específica entre los medios. Sin perjuicio de ello, algunas normas imponen al Estado y a los particulares publicar determinada información en los diarios de circulación nacional, otros en diarios de circulación regional, y otros en ambos.

Colombia: La ley 1474 de 2011 estableció en el artículo 10 que la publicidad oficial de las entidades públicas y las sociedades con participación mayoritaria del Estado, debe buscar el cumplimiento de la finalidad de la respectiva entidad; garantizar el derecho a la información de los ciudadanos; procurar la mayor limitación en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios de comunicación para lograr la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos; y sujetarse a criterios preestablecidos de efectividad, transparencia y objetividad. La citada norma prohíbe el uso de la publicidad oficial para la promoción de servidores públicos, partidos políticos o candidatos, o que hagan uso de su voz, imagen, nombre, símbolo, logo o cualquier otro elemento identificable que pudiese inducir a confusión. Así mismo, prohíbe a las entidades objeto de la reglamentación patrocinar, contratar o realizar publicidad oficial que no esté relacionada con las funciones que legalmente deben cumplir, o contratar la impresión de ediciones de lujo. La disposición obliga a las entidades a publicar periódicamente en su página de internet toda la información relativa al presupuesto, planificación y gastos relacionados con publicidad oficial.

Ecuador: No existe legislación alguna.

México: El 28 de marzo de 2018 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió (TEPJF) favoreció al diario El Universal por sobre el candidato presidencial Ricardo Anaya de la coalición Por México al Frente,

considerándose una sentencia a favor de la libertad de prensa. Anaya había utilizado spots de publicidad electoral en radio y televisión cuando era dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) para defenderse de investigaciones y críticas que El Universal le había hecho sobre su fortuna. Anaya, en un pleito legal con el diario, fue apoyado al principio por el Instituto Nacional Electoral que no lo obligó a retirar su spot de los medios, pese a que estaba usando un recurso del Estado para defenderse de un tema personal. El TEPJF determinó que el uso indebido de los spots por parte de Anaya y del PAN inhibe la libertad de prensa y el ejercicio periodístico.

No hay una regulación al respecto. El último intento se hizo en la LVIII legislatura federal (2000 – 2003) con el proyecto de Ley General para la Regulación y Control de la Publicidad Gubernamental en Materia de Prensa, Radio y Televisión, sin embargo, ésta nunca fue aprobada.

Panamá: El gasto en publicidad oficial es discrecional en todos los niveles del Estado y sus instituciones. No existe una regulación que exija un gasto equitativo ni con base en alcance.

Paraguay: No existe normativa específica en materia de publicidad oficial. Se aplican los procedimientos establecidos en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Perú: En julio del 2022 entró en vigencia la modificación a la Ley 28874, que regula la publicidad estatal. Esta modificatoria establece nuevos requisitos para el otorgamiento de publicidad oficial: 1) una autoridad local (distrito, provincia o región) que contrate publicidad debe invertir el 70% de su distribución en medios de su localidad. 2) En el caso de ser una autoridad nacional que dirige un mensaje a una localidad específica (distrito, provincia o región), el 50% se deberá destinar a medios de esa localidad. 3) Si son mensajes dirigidos a nivel nacional, el 30% de la distribución se debe destinar a medios locales. Un medio local es aquel que tiene el 50% de su programación producida en la localidad.

El 15 de noviembre de 2017 fue presentado el proyecto de ley 2133 que busca prohibir que las entidades públicas puedan contratar publicidad con medios privados. La iniciativa fue aprobada durante el receso parlamentario, luego de ser rechazada en dos ocasiones durante su trámite regular. La promulgación fue observada por el Poder Ejecutivo y actualmente se encuentra en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso. De ser aprobada representaría un retroceso, pues dejaría sin efecto una ley vigente desde el 2006 que regula de manera adecuada la asignación de la pauta oficial.

El 15 de agosto del 2006, el Congreso de la República promulgó la Ley N° 28874, Ley que Regula la Publicidad Estatal, que establece estos conceptos:

Bajo responsabilidad del Titular del Pliego, la ley establece que la autorización de publicidad estatal deberá basarse en un plan de estrategia publicitaria, así como en la descripción y justificación de las campañas institucionales y comerciales que se

pretenda ejecutar; y tomar en cuenta la propuesta y justificación técnica de los medios de difusión que serán empleados, así como el proyecto de presupuesto involucrado en la actividad.

Ningún funcionario municipal, -lo cual incluye a alcalde y regidores-, así como de las entidades y dependencias que conforman el Gobierno Nacional, así como los Gobiernos Regionales y Municipales, podrán aparecer en el avisaje publicitario institucional o comercial que sea financiado con recursos públicos, en medios impresos, así como en los spots televisivos y radiofónicos, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 28874 que regula la publicidad estatal.

La contratación de empresas de publicidad o de medios de comunicación social no podrá ser en beneficio de una sola empresa, salvo aquellos casos en que sea necesario por razones de menores tarifas, así como por el prestigio, cartera y eficiencia en la prestación de los servicios que la empresa acredite.

El Artículo 53º de la Ley de Radio y Televisión, N° 28278, establece que luego de publicada la convocatoria a comicios electorales generales, regionales o municipales o consultas populares, ninguna entidad estatal a excepción de los Organismos del Sistema Electoral, pueden contratar aviso publicitario alguno en los servicios de radiodifusión, salvo autorización expresa del Jurado Nacional de Elecciones. El 18 de febrero de 2011, Mediante Resolución N° 004-2011-JNE, el Jurado Nacional de Elecciones aprobó el Reglamento de Publicidad Estatal en periodo Electoral que establece las disposiciones que las entidades del Estado deberán cumplir para contratar o reportar su inversión en publicidad estatal al Jurado Nacional de Elecciones, una vez convocadas las Elecciones.

Puerto Rico: Al amparo del Art. 10.006 de la Ley 222-2011 (según enmendada, conocida como la “Ley para la Fiscalización de Campañas Políticas en Puerto Rico) durante que se realice una elección general se prohíbe a todo departamento, agencia, negociado, junta, oficina, dependencia y corporación pública adscritas a la Rama Ejecutiva; a los gobiernos municipales; a la Asamblea Legislativa y a todos los componentes de la Rama Judicial a desembolsar fondos públicos del Gobierno de Puerto Rico con el propósito de exponer logros, realizaciones, proyecciones, planes o mensajes y contenidos con fines político-partidistas o electorales que busquen resaltar, destacar o desfavorecer a un aspirante, candidato, funcionario electo, partido político o comité sin que previamente se haya solicitado autorización a la Oficina del Contralor Electoral dentro de los términos, los procedimientos y los requisitos ordinarios que para tales fines se hayan establecido en el reglamento de “Fiscalización de Gastos de Difusión Pública”. Esta prohibición está dirigida a la compra de tiempo y espacio en los medios de comunicación y difusión, así como a la compra y la distribución de materiales propagandísticos o promocionales.

República Dominicana: En junio de 2022 la Comisión Permanente de Medios, de la Cámara de Diputados, estudia el Proyecto de Ley que Regula la Propaganda y Publicidad del Estado ([Sociedad Dominicana de Diarios.docx.pdf](#)). La Sociedad Dominicana

	<p>de Diarios (SDD) y directores de medios de comunicación consideran que la iniciativa “es peligrosa, ambigua, y coloca una camisa de fuerza hasta en el diseño de la presentación de la publicidad”. El proyecto tiene el objetivo de “impedir que los funcionarios públicos utilicen el dinero del Estado para rendirle culto a su personalidad y fortalecer su imagen con la finalidad de políticas posteriores”. Preocupa el artículo 15 que “pretende hacer responsables a los medios de comunicación de la gestión gubernamental en materia publicitaria, cargando con las consecuencias de sus posibles violaciones”.</p> <p>Proyecto de Ley presentado por el presidente Leonel Fernández en febrero de 2011.</p> <p>Uruguay: En agosto de 2015 fue presentado a la Cámara de Representantes un proyecto de ley destinado a regular la concentración en los medios de comunicación de la publicidad oficial de cualquier organismo público. La iniciativa fue propuesta por la ong Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo).</p>
<p>Restricciones económicas</p>	<p>Argentina: En 2023 la industria periodística, como la mayoría de los rubros de la economía, sufre limitaciones a las importaciones (por el control a la salida de dólares del Banco Central desde 2021), que afectaron el ingreso de papel para diarios y revistas, además de otros insumos clave para el sector. Instituciones como Adep impulsan la autorización de partidas de importación que se conceden con limitaciones y que han obligado, a revistas, por cierto tiempo durante 2022, a emplear papel de diario para sus publicaciones, y al sector gráfico en general, particularmente a los medios regionales, a enfrentar desde inicios de 2023 un horizonte incierto, en muchos casos con stocks de papel inferiores al mes.</p> <p>El 22 de diciembre de 2011, se aprobó la ley que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel de diarios. El principal fabricante del insumo en el país es la empresa Papel Prensa, de la que son socios Clarín y La Nación, junto al Estado Nacional como accionista minoritario.</p> <p>Brasil: En 2023, hay varios proyectos de ley en curso que buscan restringir la publicidad comercial de alimentos, bebidas, juguetes y otros.</p> <p>Brasil: Em 2023, há vários projetos de lei em tramitação que buscam restringir a publicidade comercial de alimentos, bebidas, de brinquedos e outros.</p> <p>Chile: Ley de Prensa, 19.733, establece los requisitos para ser propietario de un medio de comunicación social, artículo 9. Deben ser personas naturales o jurídicas con domicilio en el país.</p> <p>Colombia: No existen restricciones económicas al ejercicio del periodismo.</p>

	<p>Ecuador: La Ley de Telecomunicaciones, promulgada en el 2011, establece que si alguien tiene el 6% o más de acciones en un medio de comunicación de carácter nacional, no puede tener ningún otro negocio ni directa ni indirectamente.</p> <p>Panamá: La ley 24 de 1999 (artículo 26) establece prohibiciones a la propiedad de medios de comunicación. No puede haber solapamiento entre las áreas de cobertura de radio y televisión y las áreas de circulación de un diario impreso y prohíbe que un concesionario de televisión o radio sea propietario de más del 50% de un periódico y viceversa. El artículo 35 de la Ley 31 de 1996 prohíbe la aplicación de la medida cautelar de secuestro civil contra los bienes y caudales de las estaciones de la radio y televisión. Esta norma discriminatoria excluye a los medios impresos y digitales de dicha protección.</p> <p>Paraguay: No existen restricciones económicas.</p> <p>Perú: Constitución de 1993 establece que el Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limita y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. La Ley 28278 Ley de Radio y Televisión, 2004, establece en el Artículo 22 sobre “Prohibiciones, Impedimentos y Causales de denegatoria de una solicitud de autorización de licencia. Ser titular de más del: 20% de frecuencias, en una misma banda de frecuencia por localidad, en el caso de Radiodifusión Sonora, 30% de canales, en el caso de Radiodifusión por Televisión. El artículo 24 establece que solo pueden ser titulares, tanto de licencias como de autorizaciones, las personas naturales, de nacionalidad peruana y personas jurídicas constituidas en el Perú. Se limita la participación de extranjeros dentro de las personas jurídicas que busquen ser titulares de autorizaciones y licencias a un máximo de 40% y condicionado a que en su país de origen sean titulares o tengan participación en empresas de radiodifusión. En 2014, es materia de intenso debate la presunta concentración de la propiedad en la prensa escrita como resultado de la asociación en agosto del 2013 entre el Grupo El Comercio y el Grupo Epena, dos de las tres principales cadenas de diarios en Perú. En ese sentido, ocho personalidades vinculadas a la prensa, presentaron en noviembre de 2013 una demanda de amparo constitucional contra El Comercio y Epena, solicitando la anulación de la operación comercial amparándose en el artículo 61 de la Constitución del Perú, argumentando que ha generado que controlen el 78% de la propiedad y circulación, y casi el 90% de la venta de publicidad total nacional en diarios. Afirman que esta situación perjudica fatalmente la libre competencia y la libertad de expresión.</p>
Secreto profesional	<p>Argentina: La garantía del secreto de la fuente de información periodística está consagrada por el artículo 43 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la jurisprudencia. El agregado final que contiene el art. 43, párrafo 3º, de la Constitución Nacional, incorporado con la reforma de 1994, reconoce el secreto periodístico, y como consecuencia del banco de datos periodísticos. También está expuesto en las constituciones de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.</p>

Brasil: La Constitución Federal garantiza a todos el acceso a la información y salvaguarda el secreto de las fuentes cuando sea necesario para el ejercicio profesional (art. 5, inc. XIV).

Brasil: A Constituição Federal assegura a todos o acesso à informação e resguarda o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional (art. 5º, inc. XIV).

Chile: El secreto de la fuente se encuentra consagrado en el Artículo 7 de la Ley de Prensa, 19.733 para los periodistas, directores, editores, estudiantes en práctica profesional, y corresponsales extranjeros en Chile. Por su parte, los Códigos de Procesamiento Penal y Civil protegen el secreto profesional.

Colombia: La inviolabilidad del secreto profesional está consagrada en el inciso segundo del artículo 74 de la Constitución Política de Colombia.

Costa Rica: Una resolución de la Sala Constitucional fue aprobada en mayo de 2008, señaló que “el secreto de las fuentes no protege solo al informador o al informante, sino también a todo el conglomerado social que es titular del derecho a recibir información... este derecho es garantía de una prensa libre, fuerte, responsable e independiente”.

Ecuador: La Ley Orgánica de Comunicación establece: CAPÍTULO I, Principios, Art. 10.- Normas deontológicas, numeral 3. Concernientes al ejercicio profesional, h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto profesional. El Art. 20 de la Constitución establece: “El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación”.

Estados Unidos: In recent years there have been bills for federal shield laws in the United States Congress; however, none of these bills have passed the Senate. The Free Flow of Information Act (<https://www.govtrack.us/congress/bills/113/s987/text>) is a bill intended to provide a news reporter with the right to refuse to testify as to information or sources of information obtained during the newsgathering and dissemination process. The bill is an effort to enact a shield law at the federal level. As of 2015, 40 states and the District of Columbia offer shield law protections. There are ten states with no form of shield laws. These laws vary from state to state. Some protections apply to civil but not to criminal proceedings. Other laws protect journalists from revealing confidential sources, but not other information. While some state legislatures have adopted protections into state law, others such as New Hampshire rely on state court precedents.

States with shield laws: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Washington, West Virginia, and Wisconsin. States without shield laws: Idaho, Iowa, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, South Dakota, Vermont, Virginia, and Wyoming.

México: El 19 de abril 2006, el Congreso aprobó el secreto profesional (reserva de la fuente de información ante el requerimiento de las autoridades judiciales). Para su entrada en vigencia, la ley de reforma deberá ser sancionada por el Poder Ejecutivo. En octubre de 2010 el Congreso de Coahuila sometió una iniciativa de decreto para expedir a nivel local la Ley del Secreto Profesional del Periodista del Estado de Coahuila, que penaría hasta con cinco años de cárcel a quien obligue, mediante ciertos medios, a un periodista a revelar sus fuentes de información, sin embargo, nunca fue aprobada.

El gobernador del estado de Sinaloa presentó al Congreso local un proyecto de iniciativa para crear la Ley de Periodismo de Alto Riesgo, ésta establece el secreto periodístico.

El Congreso de Chihuahua aprobó el 28 de junio de 2011 una ley de protección para el secreto periodístico.

El 24 de marzo del 2011, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el secreto profesional de los periodistas está protegido por los artículos sexto y séptimo constitucionales, que garantizan los derechos a la libertad de expresión y de información. Esto al desechar la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del artículo 322 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que buscaba excluir a los comunicadores de la obligación de reservarse sus fuentes de información.

El 11 de septiembre de 2014, El Gobierno del Distrito Federal (GDF) publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, las reformas a la Ley del Secreto Profesional para el Periodista en el Distrito Federal en sus fracciones I, II, III y IV, del artículo 2; el párrafo primero, del artículo 3; 7, 8, a fin de armonizar el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas en todas sus formas y manifestaciones. En el documento se precisa que las personas físicas periodistas o colaboradores, con o sin remuneración, tienen el derecho para difundir y publicar ideas u opiniones de toda índole en medios de comunicación de difusión públicos, digitales, imagen y otros.

Panamá: Cuenta con una multiplicidad de leyes que regulan el ejercicio de profesiones técnicas, científicas y de otra naturaleza que incluyen entre sus principios la protección del secreto profesional principalmente de profesionales de la salud, psicólogos y otros especialistas de la conducta humana.

	<p>Paraguay: Constitucional Nacional Artículo 29 - DE LA LIBERTAD DE EJERCICIO DEL PERIODISMO. El ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa. Los periodistas de los medios masivos de comunicación social en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información.</p> <p>El periodista columnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin censura, en el medio en el cual trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad haciendo constar su disenso. Se reconoce al periodista el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera sea su técnica, conforme con la ley.</p> <p>Perú: La Constitución Política establece en el Artículo 2° Inciso 18 que toda persona tiene derecho a mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional. En diciembre de 1994, la Octava Sala Penal de la Corte Superior de Lima, reconoció a una periodista el derecho de no divulgar su fuente de información.</p> <p>Puerto Rico: El Artículo 176 del Código Penal de Puerto Rico establece que toda persona que sin justa causa, en perjuicio de otra, revele secretos que han llegado a su conocimiento en virtud de su profesión, o ministerio religioso, cargo u oficio, incurrirá en delito menos grave.</p> <p>República Dominicana: El 5 de mayo de 2009, la Asamblea Nacional revisora aprobó la inviolabilidad del secreto profesional de la fuente periodística, aunque reconoció el derecho de amparo que tiene una persona para tomar conocimiento de los datos a ella referidos.</p>
Fake news	<p>Argentina: En octubre de 2020, el gobierno puso en marcha el Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (NODIO) con el objetivo de “proteger a los ciudadanos de las noticias falsas, maliciosas y falacias” que circulan por internet. (LatAm Journalism Review)</p> <p>Brasil: En julio de 2020, el Senado Federal aprobó el Proyecto de Ley 2.630/20, que establece la Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet. El PL 2.630/20 se encuentra ahora en la Cámara de Diputados y se le han unido otros 87 proyectos de ley sobre el tema. Conocida como Fake News Bill, la propuesta excluye a las empresas periodísticas de su ámbito de aplicación e incluye la previsión de que las BigTechs remuneren a las empresas periodísticas por sus contenidos.</p> <p>Brasil: O Senado Federal aprovou em julho de 2020 o Projeto de Lei 2.630/20, que Institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O PL 2.630/20 tramita agora na Câmara dos Deputados e recebeu o</p>

apensamento de outros 87 projetos de lei sobre o tema. Conhecido com Projeto das Fake News, a proposta exclui do seu alcance as empresas jornalísticas e inclui a previsão de remuneração de conteúdo das empresas jornalísticas pelas BigTechs.

Chile: Para diciembre de 2020, al menos tres proyectos que regulan y sancionan la difusión de desinformación en internet están siendo procesados por la Cámara de Diputados. Uno de ellos tipifica en el Código Penal el delito de “difusión de noticias falsas que perturben el orden social o causen pánico en la población”, con pena de prisión. Otra, inspirada en la pandemia del Covid-19, prevé una sanción de hasta US \$14.000 para quien propague “por redes sociales u otros medios de comunicación, noticias falsas destinadas a entorpecer la labor de la autoridad en períodos de crisis sanitaria”. Una tercera iniciativa contempla la pena de prisión y multa de hasta US 7.000 dólares para todo aquel que difunda “acusaciones, imputaciones o noticias que se refieran a hechos que sean capaces de alterar la sinceridad del proceso electoral en curso”. ([LatAm Journalism Review](#))

Colombia: 2020, la propuesta de reforma electoral tenía por objeto tipificar la “violencia política”, y por tanto prohibir, la divulgación de “noticias falsas o injuriosas (...) a través de medios de propaganda o publicidad regulados en el presente código”. El pasaje fue retirado del proyecto tras la presión social contra lo que se calificó como “una prohibición de hablar mal de los políticos”. La iniciativa es la más reciente de una serie de propuestas legislativas respecto del mismo tema. ([LatAm Journalism Review](#))

El Salvador: Una propuesta pendiente desde marzo de 2020 apunta a agregar al Código Penal una pena máxima de hasta cinco años de prisión para “el que anunciando desastres, accidentes, o peligros inexistentes, suscitare alarma entre las autoridades o personas particulares”. ([LatAm Journalism Review](#))

Nicaragua: En octubre de 2020, el Parlamento nicaragüense aprobó la ley contra los delitos digitales, “cometidos por medio de las tecnologías de la información y comunicación”, que contó con el apoyo del presidente Daniel Ortega. Además de delitos como el robo de datos, el espionaje digital y la piratería, la legislación penaliza la divulgación de información falsa en internet, delito que prevé una pena de dos a cinco años de prisión, que puede llegar a ocho en caso de agravación. La nueva legislación entra en vigencia en 2021 y preocupa a los periodistas del país. ([LatAm Journalism Review](#))

Panamá: El artículo 260 del Código Penal castiga con 4 años de prisión a quien divulgue noticias falsas sobre la economía nacional. En materia electoral se ha considerado una propuesta para castigar a los fake news que afecten a los candidatos o al proceso electoral. Sin embargo, este tipo de norma de convertirse en ley sería sumamente difícil de aplicar.

En diciembre de 2020, una propuesta que se encuentra en discusión en la Comisión Nacional de Reforma Electoral de Panamá establece penas de 1 a 2 años de prisión para quien revele información errónea “perjudicial para cualquier proceso electoral o para los servicios prestados por el Tribunal Electoral”. ([LatAm Journalism Review](#)).

Paraguay: Un proyecto de ley de marzo de 2020 destinado a frenar la difusión de información falsa durante la pandemia de Covid-19, preveía una sanción multa para todo aquel que “difundiere dolosa o culposamente, por cualquier medio, información falsa que genere pánico en la población, vinculada a la alerta epidemiológica, o declaración de emergencia sanitaria, será castigado con multa”. Tras las críticas, el proyecto de ley fue retirado por su autor. ([LatAm Journalism Review](#))

Perú: En octubre de 2020, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley para prohibir la difusión de noticias falsas como la propaganda electoral. El cambio en la ley orgánica de las elecciones quiere una pena mínima de prisión de 2 años para quienes denuncien “de forma deliberada, artificial, automatizada y/o masiva a través de un canal de comunicación masivo o red social”. ([LatAm Journalism Review](#))

Uruguay: En 2018, una propuesta para penalizar la desinformación electoral preveía hasta cuatro años de prisión. El alcance fue amplio, incluyendo “palabras escritas, canciones, símbolos, imágenes, grabaciones o videos, que idóneamente induzca a confusión a los electores”. El proyecto no salió adelante, pero los partidos políticos firmaron un pacto contra las *fake news* en la campaña electoral de 2019, tras una iniciativa de la Asociación de Prensa Uruguaya (APU). ([LatAm Journalism Review](#))

Venezuela: La reforma del Código Penal de 2005 introdujo el artículo 297-A, que castiga con hasta cinco años de prisión a las personas que “divulguen información falsa que cause pánico en cualquier medio”. Con base en este artículo, por ejemplo, los periodistas que cubrían en 2020 la pandemia Covid-19 fueron arrestados luego de publicar información sobre casos de coronavirus. ([LatAm Journalism Review](#))